

20ª REUNION — 13ª SESION ORDINARIA — 5 y 6 DE SEPTIEMBRE DE 1984

**Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
doctor VÍCTOR HIPÓLITO MARTÍNEZ**

Secretarios: doctores ANTONIO J. MACRIS y LEONARDO J. PALOMEQUE

Prosecretarios: doctor ALBERTO J. B. IRIBARNE y señor DESIDERIO L. ALMIRÓN

SENADORES PRESENTES:

AMOEDO, Julio A.
ARAUJO, Ramón A.
BENITEZ, Alfredo L.
BERHONGARAY, Antonio T.
BITTEL, Deolindo F.
BRASESCO, Luis A. J.
BRAVO HERRERA, Horacio F.
CASTRO, Jorge A.
CELLI, Felipe
CONCHEZ, Pedro A.
DE LA RUA, Fernando
FALSONE, José A.
FERIS, Gabriel
GASS, Adolfo
GIL, Francisco
GÓMEZ CENTURION, Carlos E.
GURDULICH de CORREA, Liliana I.
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
LECONTE, Ricardo G.
LEÓN, Luis A.
MALHARRO de TORRES, Margarita
MARINI, Celestino A.
MARTIARENA, José H.
MATHUS ESCORIHUELA, Miguel A.

MAUHUM, Fernando H.
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
MURGUIA, Edgardo P. V.
NAPOLI, Antonio O.
NIEVES, Rogelio J.
OTERO, Edison
RIVAS, Olijela del Valle
RODRÍGUEZ SAA, Alberto J.
SAADI, Vicente L.
SALIM, Luis
SANCHEZ, Libardo N.
SAPAG, Elías
SIGAL, Humberto C.
SOLANA, Jorge D.
TRILLA, Juan
VELAZQUEZ, Héctor J.
VIDAL, Manuel D.
VILLADA, Francisco R.
WOODLEY, Kenneth W.

AUSENTES, CON AVISO:

ALMENDRA, Ramón A.
BRITOS, Oraldo N.

SUMARIO

I. —Asuntos entrados:

- I. — Comunicaciones de la Presidencia. (Página 1648.)
- II. — Mensajes del Poder Ejecutivo en los que solicita acuerdos. (Pág. 1648.)
- III. — Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 1648.)
- IV. — Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 1649.)
- V. — Comunicaciones oficiales. (Pág. 1650.)
- VI. — Dictámenes de comisiones. (Pág. 1650.)
- VII. — Peticiones particulares. (Pág. 1651.)
- VIII. — Proyecto de comunicación de los señores senadores Gómez Centurión y Gil sobre inclusión en el próximo censo nacional de información sobre discapacitados. (Pág. 1652.)
- IX. — Proyecto de ley de los señores senadores Rivas y Araujo por el que se deroga la ley 20.123 y se modifica la 14.473 (Estatuto del Docente.) (Pág. 1653.)
- X. — Proyecto de comunicación del señor senador Velázquez y otros señores senadores por el que se crea una sucursal del Banco de la Nación Argentina en Jardín América, Misiones. (Pág. 1654.)
- XI. — Proyecto de comunicación del señor senador Velázquez y otros señores senadores por el que se eleva de categoría a sucursales del Banco de la Nación Argentina en Misiones. (Pág. 1654.)
- XII. — Proyecto de comunicación del señor senador Britos sobre reincorporación de trabajadores despedidos de la empresa Deutz S.A. (Pág. 1655.)
- XIII. — Proyecto de comunicación del señor senador Lafferrière por el que se modifica la ley 21.384 (derogación de exenciones impositivas en favor de ciertos aseguradores). (Pág. 1656.)
- XIV. — Proyecto de comunicación del señor senador Rodríguez Saá sobre emisión de un sello postal en homenaje al poeta Esteban Agüero. (Pág. 1656.)
- XV. — Proyecto de ley del señor senador Britos sobre creación de un fondo para la construcción de escuelas rurales denominado "Congreso de la Nación". (Página 1657.)
- XVI. — Proyecto de ley del señor senador Britos sobre transferencia de un inmueble al Club General San Martín de Villa Mercedes, San Luis. (Pág. 1658.)
- XVII. — Proyecto de comunicación del señor senador Almendra por el que se otorga un subsidio al Colegio Salesiano San José Obrero, de Caleta Olivia, Santa Cruz. (Pág. 1658.)
- XVIII. — Proyecto de comunicación de los señores senadores Britos y Marini por el que se piden informes al Poder Ejecutivo sobre sanciones al personal no docente. (Pág. 1659.)
- XIX. — Proyecto de ley del señor senador Britos por el que se deroga la ley 21.307 y se convoca a convenciones colectivas de trabajo. (Pág. 1659.)
- XX. — Proyecto de comunicación del señor senador Mathus Escorihuela sobre libre ejercicio de la actividad de empresas periodísticas. (Pág. 1660.)
- XXI. — Proyecto de resolución del señor senador Salim sobre parada de trenes en Lavalle, Santiago del Estero. (Página 1660.)
- XXII. — Proyecto de resolución de los señores senadores Bittel y Murguía por el que se piden informes acerca de la política presupuestaria y laboral de la Comisión Nacional de Energía Atómica. (Página 1661.)
- XXIII. — Proyecto de comunicación del señor senador Falsone sobre reparación de los muelles del Puerto Viejo en la localidad de Eldorado, Misiones. (Página 1663.)
- XXIV. — Proyecto de ley del señor senador Trilla y otros señores senadores sobre régimen de tránsito. (Pág. 1664.)
- XXV. — Proyecto de comunicación del señor senador Almendra sobre repavimentación de la ruta 281, en Santa Cruz. (Página 1672.)
- XXVI. — Proyecto de ley de los señores senadores Conchez y Berhongaray por el que se dispone considerar a La Pampa como provincia patagónica. (Pág. 1673.)
- XXVII. — Proyecto de comunicación del señor senador Rodríguez Saá sobre normalización de la Confederación Argentina de Deportes y llamado a elección de autoridades. (Pág. 1675.)
- XXVIII. — Proyecto de comunicación de los señores senadores Gómez Centurión y Gil

sobre instalación de líneas telefónicas automáticas y sistema de telediscado en departamentos de San Juan. (Página 1675.)

XXIX. — Proyecto de ley del señor senador Bittel por el que se declara de interés nacional la promoción, producción, comercialización y difusión del libro argentino. (Pág. 1676.)

XXX. — Proyecto de comunicación de los señores senadores Martiarena y Benítez sobre construcción de escuela politécnica en San Salvador de Jujuy. (Pág. 1680.)

XXXI. — Proyecto de comunicación de los señores senadores Martiarena y Benítez sobre dotación de un servicio contra incendios en el aeropuerto de El Cadiñal, Jujuy. (Pág. 1680.)

XXXII. — Proyecto de resolución del señor senador Mathus Escorihuela y otros señores senadores sobre adhesión al I Plenario Nacional del Personal Legislativo a llevarse a cabo en Mar del Plata. (Página 1681.)

XXXIII. — Proyecto de comunicación del señor senador Rodríguez Saá por el que se piden informes acerca del levantamiento de un programa radial. (Pág. 1682.)

XXXIV. — Proyecto de resolución del señor senador Amoedo y otros señores senadores sobre plazo para el tratamiento de proyectos relativos a equiparación de los hijos matrimoniales y no matrimoniales. (Pág. 1682.)

2. — Moción de preferencia del señor senador Brasesco para considerar en la próxima sesión con despacho de comisión o sin él el proyecto de resolución por el cual el Senado de la Nación se adhiere al I Plenario Nacional del Personal Legislativo. Se aprueba. (Pág. 1682.)

3. — Homenaje al doctor Ernesto R. Meabe. (Pág. 1683.)

4. — A pedido de los señores senadores Marini y Velázquez se resuelve instar a las comisiones el pronto despacho para el proyecto de ley que establece el calado obligatorio a treinta pies del río Paraná desde la ciudad de Santa Fe hasta su salida al río de la Plata y para el proyecto de ley relativo a la inscripción en el Registro Civil de los nombres aborígenes y derivados de voces aborígenes y latinoamericanas. (Pág. 1684.)

5. — Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad en los proyectos de ley de los señores senadores Menem y Sánchez y Amoedo y Saadi sobre patria potestad. Se aprueba con modificaciones. (Pág. 1685.)

6. — Moción de preferencia del señor senador Amoedo para considerar los dictámenes de las comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad referentes a la equiparación a todos los efectos legales de los derechos correspondientes a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, fijándose como plazo máximo la sesión a celebrarse el 19 de septiembre del corriente año. Se aprueba. (Pág. 1722.)

7. — Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley del señor senador Britos sobre creación del Régimen Nacional de Empresas de Limpieza. Se aprueba. (Pág. 1723.)

8. — Consideración del dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Economías Regionales en el proyecto de comunicación del señor senador Bittel por el que se solicita se dispongan los recaudos necesarios a fin de prevenir los trastornos que pudiera provocar la sustitución del azúcar de caña. Se aprueba. (Pág. 1725.)

9. — Consideración del dictamen de las comisiones de Transportes y de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación de los señores senadores Leconte y Feris por el que se solicita un servicio de balsas entre los puertos de Santo Tomé, Corrientes, y San Borja, Brasil. Se aprueba. (Página 1726.)

10. — Consideración del dictamen de las comisiones de Energía, de Combustibles y de Recursos Naturales y Ambiente Humano en el proyecto de comunicación de los señores senadores Martiarena y Benítez por el que se solicita la erradicación de plantas de gas existentes en Isidro Casanova, Buenos Aires. Se aprueba. (Pág. 1727.)

11. — Consideración del dictamen de las comisiones de Energía y de Combustibles en el proyecto de comunicación del señor senador Mazzucco sobre cuantificación de las reservas de carbón de yacimientos de Pico Quemado, Río Negro. Se aprueba. (Pág. 1728.)

12. — Consideración del dictamen de las comisiones de Energía y de Combustibles en el proyecto de comunicación del señor senador Murguía por el que se solicitan medidas que dispongan una legislación ordenada en materia energética. Se aprueba. (Página 1729.)

13. — Consideración del dictamen de las comisiones de Energía y de Combustibles en el proyecto de ley del señor senador Feris y otros señores senadores por el que se declara de interés nacional la producción de alcohol etílico anhidro para uso como combustible en motores a explosión. Se aprueba con modificaciones. (Pág. 1730.)

14. — Consideración del dictamen de las comisiones de Energía y de Combustibles en el proyecto de ley en revisión que deroga la ley 21.773 y restablece el pleno imperio de los artículos 2º y 3º de la ley 20.652 (carbón residual). Se aprueba. (Pág. 1738.)

Sr. Velázquez. — Señor presidente: quiero apoyar el pedido de pronto despacho que se acaba de formular.

Además, desco reiterar un pedido en el mismo sentido para un proyecto de ley que obra en la Comisión de Legislación General cuyo número de trámite parlamentario es el 228 en virtud del cual se agrega al artículo 3 de la ley 18.248 un segundo párrafo, a continuación del inciso 5º, relativo a la inscripción en el Registro Civil de nombres aborígenes y derivados de voces aborígenes, autóctonas y latinoamericanas. Este tema se liga íntimamente al que fuera objeto de sanción reciente por este alto cuerpo relacionado con los aborígenes, y en alguna medida procura incorporarlos efectivamente como ciudadanos argentinos, tal como son.

Reitero este pedido de pronto despacho, que propuse en oportunidad de la sanción de la ley que he mencionado.

Sr. Presidente. — Si hay asentimiento se recomendará a las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto y Hacienda, para el primer caso, y de Legislación General, para el segundo, el pronto despacho de los respectivos proyectos.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Como hay asentimiento, se procederá en consecuencia.

5

REGIMEN DE PATRIA POTESTAD

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad en los proyectos de ley de los señores senadores Menem y Sánchez y Amoedo y Saadi sobre patria potestad.

Por Secretaría se dará lectura

Sr. Secretario (Macris). — *(Lee):*

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad han considerado los proyectos de ley de los señores senadores Menem y Sánchez, y de los señores senadores Amoedo y Saadi, sobre patria potestad y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Refórmase el Código Civil conforme a las siguientes disposiciones:

1. Sustitúyese el artículo 264 por el siguiente:

Artículo 264. — La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de los hijos, para su protección y formación integral, desde la concepción de éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado. Su ejercicio corresponde:

- 1º En el caso de los hijos matrimoniales, al padre y a la madre conjuntamente, en tanto no estén separados o divorciados, o su matrimonio fuese anulado. Se presumirá que los actos realizados por uno de ellos cuente con el consentimiento del otro, salvo en los supuestos contemplados en el artículo 264 quater, o cuando mediare expresa oposición.
- 2º En caso de separación de hecho, divorcio, o nulidad de matrimonio, al padre o madre que ejerza legalmente la tenencia, sin perjuicio del derecho del otro de tener adecuada comunicación con el hijo y de supervisar su educación.
- 3º En caso de muerte de uno de los padres, ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la patria potestad, o suspensión de su ejercicio, al otro.
- 4º En el caso de los hijos extramatrimoniales, reconocidos por uno solo de los padres, a aquel que lo hubiere reconocido.
- 5º En el caso de los hijos extramatrimoniales, reconocidos por ambos padres, a ambos, si convivieren y, en caso contrario, a aquel que tenga la guarda otorgada en forma convencional, o judicial, o reconocida mediante información sumaria.
- 6º A quien fuese declarado judicialmente el padre o madre del hijo, si no hubiese sido voluntariamente reconocido.

2. Sanciónase como artículo 264 bis el siguiente:

Artículo 264 bis. — Cuando ambos padres sean incapaces o estén privados de la patria potestad o suspendidos en su ejercicio los hijos menores quedarán sujetos a tutela. Si los padres de un hijo extramatrimonial fuesen menores no emancipados, se preferirá a quien ejerza la patria potestad sobre aquel de los progenitores que tenga al hijo bajo su amparo o cuidado, subsistiendo en tal caso esa tutela aun cuando el otro progenitor se emancipe o cumpla la mayoría de edad.

3. Sanciónase como artículo 264 ter el siguiente:

Artículo 264 ter. — En caso de desacuerdo entre el padre y la madre, cualquiera de ellos podrá acudir al juez competente, quien resolverá lo más conveniente para el interés del hijo por el procedimiento más breve previsto por la ley local, previa audiencia de los padres con intervención del ministerio pupilar. El juez podrá, aun de oficio, requerir toda la información que

considerare necesaria y oír al menor, si éste tuviere suficiente juicio y las circunstancias lo aconsejaren. Si los desacuerdos fueren reiterados o concurriere cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá atribuirlo total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos sus funciones por el plazo que fije, el que no podrá exceder de dos años.

4. Sanciónese como artículo 264 quater el siguiente:

Artículo 264 quater. — En los casos de los incisos 1º, 2º y 5º del artículo 264, se requerirá el consentimiento expreso de ambos padres para los siguientes actos:

1º Autorizar al hijo para contraer matrimonio.

2º Habilitarlo.

3º Autorizarlo para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad.

4º Autorizarlo para salir de la República.

5º Autorizarlo para estar en juicio.

6º Disponer de los bienes inmuebles y derechos o muebles registrables de los hijos cuya administración ejercen, con autorización judicial.

7º Ejercer actos de administración de los bienes de los hijos, salvo que uno de los padres delegue la administración conforme lo previsto en el artículo 294.

En todos estos casos, si uno de los padres no diere su consentimiento, o mediara imposibilidad para prestarlo, resolverá el juez lo que convenga al interés familiar.

5. Sustitúyese el artículo 265 por el siguiente:

Artículo 265. — Los hijos menores de edad están bajo la autoridad y cuidado de sus padres. Tienen éstos obligación y derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, no sólo con los bienes de aquéllos sino con los suyos propios.

6. Sustitúyese el artículo 269 por el siguiente:

Artículo 269. — Si el hijo menor de edad, ausente del hogar, se hallase en urgente necesidad, que no pueda ser atendida por los padres, las provisiones que se le hagan se juzgarán hechas con autorización de ellos.

7. Sustitúyese el artículo 271 por el siguiente:

Artículo 271. — En caso de divorcio, o separación judicial de bienes, o nulidad de matrimonio, incumbe siempre a los padres el deber de dar alimentos a sus hijos y educarlos, no obstante que la guarda sea ejercida por uno de ellos.

8. Sustitúyese el artículo 272 por el siguiente:

Artículo 272. — Si el padre o la madre faltasen a esta obligación pueden ser demandados por la prestación de alimentos, o por el propio hijo si fuere adulto, asistido por un tutor especial, o por cualquiera de los parientes, o por el ministerio de menores.

9. Derógase el artículo 273.

10. Sustitúyese el artículo 275 por el siguiente:

Artículo 275. — Los hijos no pueden dejar el hogar, o aquel en que sus padres los han colocado, ni enrolarse en servicio militar, ni entrar en comunidades religiosas, ni obligar sus personas de otra manera, ni ejercer oficio, profesión o industria separada, sin licencia o autorización de sus padres.

11. Sustitúyese el artículo 276 por el siguiente:

Artículo 276. — Si los hijos dejasen el hogar, o aquel en que sus padres los hubiesen puesto, sea que ellos se hayan sustraído a su obediencia, o que otros los detengan, los padres pueden exigir que las autoridades públicas les presten toda la asistencia que sea necesaria para hacerlos entrar bajo su autoridad. Ellos pueden acusar criminalmente a los seductores o corruptores de sus hijos, y a las personas que los retuvieron.

12. Sustitúyese el artículo 278 por el siguiente:

Artículo 278. — Los padres tienen la facultad de corregir o hacer corregir la conducta de sus hijos. El poder de corrección debe ejercerse moderadamente, debiendo quedar excluidos los malos tratos, castigos o actos que lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los menores. Los jueces deberán reprimir las correcciones excesivas de los padres.

13. Derógase el artículo 281.

14. Sustitúyese el artículo 282 por el siguiente:

Artículo 282. — Si los padres o uno de ellos niegan su consentimiento al hijo para intentar una acción civil contra un tercero, el juez, con conocimiento de los motivos que para ello tuviera el oponente, puede suplir la licencia, dando al hijo un tutor especial para el juicio.

15. Sustitúyese el artículo 283 por el siguiente:

Artículo 283. — Se presume que los menores adultos, si ejercieren algún empleo, profesión o industria, están autorizados por sus padres para todos los actos y contratos concernientes al empleo, profesión o industria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 131. Las obligaciones que de estos actos nacieren, recaerán únicamente sobre los bienes cuya administración y usufructo, o sólo el usufructo, no tuvieron los padres.

16. Sustitúyese el artículo 284 por el siguiente:

Artículo 284. — Los menores adultos ausentes del hogar, con autorización de los padres, en país extranjero o en lugar remoto dentro de la República, que tuviesen necesidad de recursos para sus alimentos u otras necesidades urgentes, podrán ser autorizados por el juez del lugar o por el cónsul de la República para contraer deudas que satisfagan la necesidad en que se hallaren.

17. Sustitúyese el artículo 285 por el siguiente:

Artículo 285. — Los menores no pueden demandar a sus padres sino por sus intereses pro-

pios, y previa autorización del juez, aun cuando tengan una industria separada o sean comerciantes.

18. Sustitúyese el artículo 286 por el siguiente:

Artículo 286. — No es precisa la autorización de los padres para estar en juicio, cuando el menor adulto sea demandado criminalmente, ni para reconocer hijos extramatrimoniales ni para testar.

19. Sustitúyese el artículo 287 por el siguiente:

Artículo 287. — El padre y la madre tienen, por mitades, el usufructo de los bienes de sus hijos legítimos, o de los extramatrimoniales voluntariamente reconocidos, que estén bajo su patria potestad, con excepción de los siguientes:

- 1º De los adquiridos mediante su trabajo, empleo, profesión o industria, aunque vivan en casa de sus padres.
- 2º De los que hereden con motivo de la indignidad o desheredación de sus padres.
- 3º De los adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el donante o testador ha dispuesto que el usufructo corresponda al hijo.

20. Derógase el artículo 289.

21. Sustitúyese el artículo 290 por el siguiente:

Artículo 290. — Es implícita la cláusula de no tener los padres de usufructo de los bienes donados o dejados a los hijos de familia, cuando esos bienes fuesen donados o dejados con indicación del empleo que deba hacerse de los respectivos frutos o rentas.

22. Sustitúyese el artículo 293 por el siguiente:

Artículo 293. — Los padres son los administradores legales de los bienes de los hijos que están bajo su potestad, con excepción de los siguientes:

- 1º De los adquiridos mediante su trabajo, empleo, profesión o industria.
- 2º De los que hereden con motivo de la indignidad o desheredación de sus padres.
- 3º De los adquiridos por herencia, legado o donación cuando han sido donados o dejados por testamento bajo la condición de que los padres no los administren.

23. Sustitúyese el artículo 294 por el siguiente:

Artículo 294. — La administración de los bienes de los hijos será ejercida en común por los padres cuando ambos estén en ejercicio de la patria potestad. Los actos conservatorios pueden ser otorgados indistintamente por el padre o la madre.

Los padres podrán designar de común acuerdo a uno de ellos administrador de los bienes de los hijos, pero en ese caso el administrador necesitará el consentimiento expreso del otro para todos los actos que requieran también autorización judicial. En caso de graves o persistentes desacuerdos sobre la administración de

los bienes, cualquiera de los padres podrá requerir al juez competente que designe a uno de ellos administrador.

24. Sustitúyese el artículo 295 por el siguiente:

Artículo 295. — La condición que prive a los padres de administrar los bienes donados o dejados a los hijos, no les priva del derecho al usufructo.

25. Sustitúyese el artículo 297 por el siguiente:

Artículo 297. — Los padres no pueden, ni aun con autorización judicial, comprar por sí, ni por interpuesta persona, bienes de sus hijos aunque sea en remate público, ni constituirse cesionarios de créditos, derechos o acciones contra sus hijos, ni hacer partición privada con sus hijos de la herencia del progenitor prefallecido, ni de la herencia en que sean con ellos coherederos o colegatarios, ni obligar a sus hijos como fiadores de ellos o de terceros.

Necesitan autorización judicial para enajenar bienes de cualquier clase de sus hijos, constituir sobre ellos derechos reales o transferir derechos reales que pertenezcan a sus hijos sobre bienes de terceros.

26. Sustitúyese el artículo 298 por el siguiente:

Artículo 298. — Igualmente necesitan autorización judicial para enajenar los ganados de cualquier clase, que formen los establecimientos rurales, salvo aquellos cuya venta es permitida a los usufructuarios que tienen el usufructo de rebaños.

27. Sustitúyese el artículo 303 por el siguiente:

Artículo 303. — Removido uno de los padres de la administración de los bienes, ésta corresponderá al otro; si ambos fueran removidos, el juez la encargará a un tutor especial, y éste entregará a los padres, por mitades, el sobrante de las rentas de los bienes de los hijos, después de satisfechos los gastos de administración, de los alimentos y educación de ellos.

28. Derógase el artículo 305.

29. Agrégase al artículo 306 el siguiente inciso:

5º Por la adopción de los hijos, sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso de revocación o nulidad de la adopción.

30. Sustitúyese el artículo 307 por el siguiente:

Artículo 307. — El padre o madre quedan privados de la patria potestad:

- 1º Por ser condenados como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes de alguno de sus hijos, o como coautor, instigador o cómplice de un delito cometido por el hijo;
- 2º Por el abandono que hiciere de alguno de sus hijos, para el que los haya abandonado, aun cuando quede bajo guarda o sea recogido por el otro progenitor o un tercero;

3º Por poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica, o la moralidad del hijo, mediante malos tratamientos, ejemplos perniciosos, conducta notoria o delincuencia.

31. Sustitúyese el artículo 308 por el siguiente:

Artículo 308. — La privación de la patria potestad podrá ser dejada sin efecto por el juez si los padres demostraren que, por circunstancias nuevas, la restitución se justifica en beneficio e interés del hijo.

32. Sustitúyese el artículo 309 por el siguiente:

Artículo 309. — El ejercicio de la patria potestad queda suspendido mientras dure la ausencia de los padres judicialmente declarada conforme a los artículos 15 a 21 de la ley 14.394. También queda suspendido en caso de interdicción de alguno de los padres, hasta que sea rehabilitado y en los supuestos establecidos en el artículo 12 del Código Penal.

Podrá suspenderse el ejercicio de la patria potestad en caso de que los hijos sean entregados por sus padres a un establecimiento de protección de menores. La suspensión será resuelta por el juez, con audiencia de los padres, de acuerdo con las circunstancias del caso.

33. Sustitúyese el artículo 310 por el siguiente:

Artículo 310. — En los casos de privación de la patria potestad o suspensión de su ejercicio, los menores quedan bajo el patronato del Estado nacional o provincial.

34. Sustitúyese el artículo 1.114 por el siguiente:

Artículo 1.114. — El padre y la madre son solidariamente responsables de los daños causados por sus hijos menores que habiten con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad de los hijos si fueren mayores de diez años.

En caso de divorcio o anulación del matrimonio de los padres, será responsable el que ejerza la patria potestad, salvo que en el momento de producirse el evento dañoso el hijo estuviere transitoriamente bajo la guarda del otro progenitor.

35. Sustitúyese el artículo 149 por el siguiente:

Artículo 149. — Si el denunciado como demente fuere menor de edad, su padre, su madre o su tutor ejercerán las funciones del curador provisorio.

Art. 2º — Sustitúyase el artículo 10 de la ley 2.393 por el siguiente:

Artículo 10. — La mujer mayor de catorce (14) años y el hombre de dieciséis (16) años, pero menores de edad, aunque estén emancipados por habilitación de edad, no pueden casarse entre sí ni con otra persona, sin el consentimiento de su padre y de su madre, o de aquel de ellos que ejerza la patria potestad, o sin el de su tutor cuando ninguno de ellos la ejerce, o, en su defecto, sin el del juez.

Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito necesitan consentimiento del curador o autorización del juez.

Art. 3º — Sustitúyese el artículo 13 de la ley 10.903 por el siguiente:

Artículo 13. — La privación de la patria potestad o la suspensión de su ejercicio no importan liberar a los padres de las obligaciones impuestas por los artículos 265, 267 y 268 del Código Civil, si no fueren indigentes.

Art. 4º — Sustitúyese el inciso 3º del artículo 19 de la ley 14.394 por el siguiente:

3º El padre o la madre.

Art. 5º — Sustitúyese el artículo 12 del Código de Comercio por el siguiente:

Art. 12. — El hijo mayor de dieciocho años que fuese asociado al comercio del padre o de la madre, será reputado autorizado y mayor para todos los efectos legales en las negociaciones mercantiles de la sociedad.

Art. 6º — Sustitúyese el artículo 7º de la ley 22.278 por el siguiente:

Artículo 7º — Respecto de los padres, tutores o guardadores de menores a que se refieren los artículos 1º y 2º, el juez podrá declarar la privación de la patria potestad o la suspensión, o la privación de la tutela o guarda, según correspondiere.

Art. 7º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 14 de agosto de 1984.

Vicente L. Saadi. — Luis J. Brasesco. — Adolfo Cass. — Olijelo del Valle Rivas. — Alberto J. Rodríguez Saá. — José A. Falsone. — Felipe Celli. — Margarita Malharro de Torres. — Jorge A. Castro. — Lilitana I. Gurdulich de Correa. — Antonio T. Berhongaray. — Oraldo N. Britos. — Ramón A. Araujo. — Juan Trilla.

ANTECEDENTES

1

Proyecto de ley de los señores senadores Menem y Sánchez

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados. etc.

Artículo 1º — Refórmase el Código Civil, conforme a las siguientes disposiciones:

1. Sustitúyese el artículo 264 por el siguiente:

Artículo 264. — La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de los hijos, desde la concepción de éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado. Su ejercicio corresponde:

- 1º A ambos padres, indistintamente, en tanto no estén separados o divorciados, o su matrimonio fuese anulado;
 - 2º Al padre o madre que ejerza legalmente la tenencia de los hijos en caso de separación, divorcio o nulidad del matrimonio;
 - 3º En caso de fallecimiento de uno de los padres, o de perder uno de ellos la patria potestad o su ejercicio, o suspenderse éste, al otro;
 - 4º A ambos padres extramatrimoniales si ambos hubieren reconocido al hijo, o aquel de ellos que lo haya reconocido. En caso de que los padres no conviviesen en el mismo domicilio, el ejercicio de la patria potestad corresponde al padre o madre que tenga la guarda otorgada judicialmente;
 - 5º A quien fuese declarado judicialmente el padre o madre del hijo, si no hubiese sido voluntariamente reconocido.
2. Sanciónase como artículo 264 bis el siguiente:
- Artículo 264 bis. — Si uno de los padres dedujese oposición judicial contra los actos que decidiera el otro en ejercicio de la patria potestad, el juez resolverá lo conveniente al interés del hijo, por el procedimiento más breve que prevea la ley local, previa audiencia con intervención del ministerio público. El juez podrá, aun de oficio, requerir toda información que considere necesaria y citar al menor, si fuese mayor de 14 años.
3. Sanciónase como artículo 264 ter el siguiente:
- Artículo 264 ter. — Se presume que los actos cumplidos por cualquiera de los padres en ejercicio indistinto de la patria potestad cuentan con la conformidad del otro. No obstante, en los casos de los incisos 1º, 2º y 4º del artículo 264 se requerirá el consentimiento expreso de ambos para:
- 1º Autorizar a los hijos para contraer matrimonio y para habilitarlos;
 - 2º Disponer de los bienes inmuebles y derechos o muebles registrables de los hijos cuya administración ejercen, con autorización judicial;
 - 3º Ejercer actos de administración de los bienes de los hijos, salvo que uno de los padres dé poder al otro para realizarlos;
 - 4º Autorizar a los hijos para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad;
 - 5º Autorizar a los hijos a salir de la República, solos o en compañía de uno de los padres, o con otros parientes o terceros;
 - 6º Autorizar a los hijos para estar en juicio. Si uno de los padres no diere su consentimiento, o mediara imposibilidad para prestarlo, resolverá el juez lo que convenga al interés familiar.
4. Sustitúyense en el artículo 269 las palabras: "de la casa paterna" por "del hogar".

5. Sustitúyese el artículo 271 por el siguiente:
- Artículo 271. — En caso de divorcio, o separación judicial de bienes, o de nulidad del matrimonio, incumbe siempre a los padres el deber dar alimentos a sus hijos y educarlos, no obstante que la guarda sea ejercida por uno de ellos.
6. Sustitúyense en el artículo 272 las palabras: "Si el padre" por "Si los padres".
 7. Derógase el artículo 273.
 8. Sustitúyense en el artículo 275 las palabras: "la casa paterna" por "el hogar" y "aquella" por "la casa".
 9. Sustitúyense en el artículo 276 las palabras: "la casa paterna" por "el hogar" y "aquella" por "la casa".
 10. Derógase el artículo 281.
 11. Sustitúyense en el artículo 282 las palabras: "Si el padre niega" por "Si los padres o uno de ellos niegan" y "el padre" por "el oponente".
 12. Sustitúyense en el artículo 283 las palabras: "no tuviese el padre" por "no tuviesen los padres".
 13. Sustitúyense en el artículo 284 las palabras: "de la casa paterna" por "del hogar" y "con licencia del padre" por "con autorización de los padres".
 14. Sustitúyense en el artículo 286 las palabras: "del padre" por "de los padres" y suprímese la palabra "naturales".
 15. Sustitúyense en el artículo 287 las palabras: "El padre y la madre tienen el usufructo de todos los bienes" por "El padre y la madre tienen, por mitades, el usufructo de todos los bienes".
 16. Sustitúyense en el artículo 290 las palabras: "el padre" por "los padres".
 17. Sustitúyense en el artículo 293 las palabras: "el padre es el administrador legal" por "los padres son los administradores legales".
 18. Sustitúyense en el artículo 294 las palabras: "el padre no tiene" por "los padres no tienen" y "administre" por "administren".
 19. Sustitúyense en el artículo 295 las palabras: "al padre" por "a los padres" y "le" por "les".
 20. Sustitúyese en el artículo 297 la palabra "materna" por "del progenitor prefallecido".
 21. Sustitúyense en el artículo 303 las palabras: "Removido el padre" por "Removidos ambos padres" y "entregará al padre" por "entregará a ambos padres".
 22. Derógase el artículo 305.

23. Suprímese el segundo párrafo del artículo 308.
24. Agrégase al artículo 309 el siguiente párrafo: Podrá suspenderse el ejercicio de la patria potestad en caso de que los hijos fuesen entregados por sus padres a un establecimiento de protección de menores por no poder proveer a su crianza y educación. La suspensión será resuelta por el juez, con audiencia de los padres, de acuerdo a las circunstancias del caso.
25. Sustitúyese el artículo 1.114 por el siguiente:

Artículo 1.114. — Ambos padres responden por los daños que causen sus hijos menores que habiten con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad de los hijos si fueran mayores de diez años. En caso de separación, divorcio o nulidad de matrimonio de los padres, será responsable el que ejerza la tenencia, salvo que en el momento de producirse el evento dañoso estuviere transitoriamente bajo la guarda del otro cónyuge.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Eduardo Menem. — Libardo N. Sánchez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Mediante el proyecto de ley que se acompaña, se introducen modificaciones en el régimen de la patria potestad, para lo cual se reforma el articulado del título II, sección II, libro primero del Código Civil.

En el texto legal propuesto se establece la patria potestad compartida para ciertos actos a realizar por los hijos y que, dada su trascendencia, requieren la intervención de ambos padres para su autorización. En cambio, se prevé el ejercicio indistinto de la patria potestad para todos aquellos actos que no revistan ese carácter de importancia, por lo que pueden ser autorizados por cualesquiera de los progenitores sin mediar el consentimiento expreso del otro.

La patria potestad compartida constituye la culminación de un largo proceso de evolución de las relaciones familiares, una de cuyas principales características fue el reconocimiento de los derechos de la mujer casada, su emancipación y su constante avance hacia un plano de igualdad en relación a los derechos del esposo dentro del hogar. En tal sentido, resulta ilustrativo recordar que ya Vélez Sársfield, en su siempre citada nota al artículo 305 del Código Civil —en el que se otorga a la madre el ejercicio de la patria potestad en caso del fallecimiento del padre— expresaba para fundamentar esa posición que "...ésta era la marcha natural de la civilización, elevando contra las más antiguas costumbres la condición de las madres de familia. El derecho ha marcado también, y acabará por ser reconocida en los países cultos la necesidad y conveniencia de poner a la madre, en sus relaciones de derecho, a la par del padre".

La premonición de nuestro codificador fue totalmente acertada, toda vez que en la legislación de numerosos países se ha receptado el régimen de ejercicio conjunto de la patria potestad por el padre y la madre, refle-

jando de ese modo la realidad de las comunidades civilizadas, en las que la condición de la mujer casada ha evolucionado hacia su equiparación con el marido, tal como la anticipaba Vélez Sársfield. Como ejemplo de lo expresado se puede citar el Código Civil francés (artículo 372, según el texto introducido por la ley 70-459 del 4 de junio de 1970); el Código Civil español (artículo 156, según ley 11 de 1981); el Código Civil italiano (artículo 316, 2º párrafo, según ley 151 de 1975); el Código Civil de Colombia (artículo 288, según decreto 2.820/74) y los códigos de familia de Bolivia (artículo 257) y de Cuba de 1975 (artículo 83).

En el mismo sentido se expide Borda (*Familia*, tomo 2, páginas 173/174) al sostener que "...en la práctica la patria potestad se ejerce conjuntamente..." y que "...el derecho moderno tiende a reconocer la coparticipación de la madre en la patria potestad, con lo que no se hace sino reflejar la realidad...". En apoyo de esta tesis se remite a la referencia de legislación comparada que efectúa Castán Vázquez en sus trabajos *La patria potestad* y *La participación de la madre en la patria potestad*.

En el proyecto se propone instituir la patria potestad compartida, o conjunta para aquellos actos que revisten especial importancia para la formación o educación del hijo, o que puedan afectar sus intereses personales, tales como: la autorización para contraer matrimonio y para habilitarlos; la de disponer de bienes inmuebles y derechos o muebles registrables de los hijos cuya administración ejercen con autorización judicial; la de ejercer actos de administración de los bienes de los hijos; la de autorizar a los hijos para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad; la de autorizar a los hijos para salir de la República y para estar en juicio. Se prevé también la posibilidad de recurrir ante la justicia en el caso de que mediare negativa de uno de los cónyuges a prestar consentimiento para el acto o de que hubiere imposibilidad de prestarlo. Se ha optado por este sistema, en vez de hacerlo por el que otorga el poder de decisión al padre en caso de disenso, por cuanto en definitiva también en este caso se podrá recurrir a la justicia, con lo que el trámite se complificaría innecesariamente.

Para la realización de actos distintos a los mencionados se establece el ejercicio indistinto de la patria potestad por parte de ambos progenitores, por entenderse que se trata de actos de tipo doméstico, en los que es suficiente la concurrencia de cualquiera de aquéllos para su autorización. Se justifica este criterio teniendo en cuenta la escasa trascendencia que tienen estos actos, por lo que cabe presumir que la autorización dada por uno de los padres cuenta con el asentimiento del otro, sin perjuicio del derecho de éste a oponerse en el supuesto de que entendiera que el acto en cuestión es inconveniente para los intereses del menor, supuesto en el que podrá también recurrirse a la justicia.

Con el régimen propuesto, en el cual coexisten la patria potestad conjunta o compartida con el ejercicio indistinto de la patria potestad, se superan las observaciones principales, formuladas oportunamente por el Poder Ejecutivo a la ley 21.182, y que motivaran su no promulgación, toda vez que en este frustrado intento legislativo se contemplaba únicamente el ejercicio

indistinto de la patria potestad, evidenciando una cierta confusión con la compartida o conjunta lo cual queda perfectamente aclarado y deslindado en el presente proyecto.

Por otra parte, se contempla también el supuesto en que los padres se encuentren separados, divorciados o que se haya declarado la nulidad del matrimonio, en cuyo caso se otorga la patria potestad al que ejerza legalmente la tenencia del hijo, pero exigiéndose la concurrencia de ambos padres, para la autorización de aquellos actos reservados al ejercicio de la patria potestad compartida. Una solución similar se adopta para el caso de los padres extramatrimoniales, en el que se otorga la patria potestad al padre que lo haya reconocido, o a ambos progenitores si el reconocimiento hubiere sido de ellos dos, estableciéndose también que en este supuesto se requiere el consentimiento de ambos padres para la realización de los actos trascendentes antes individualizados. Se contempla asimismo la hipótesis en que los padres extramatrimoniales no convivan en el mismo domicilio, en cuyo caso la patria potestad se asigna al padre que tenga la guarda judicial, pero correspondiendo también el ejercicio conjunto o compartido para los supuestos mencionados.

Las modificaciones, supresiones y agregados que se efectúan en el resto del articulado del título II, sección II, libro primero, tienden a compatibilizar esas normas con el régimen adoptado en el proyecto, superándose también en este aspecto las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo en ocasión de fundamentarse la no promulgación de la ley 21.182.

Por último, corresponde señalar que el proyecto que se propone y las razones que lo fundan fueron elaborados en base a un trabajo realizado por los prestigiosos juristas doctores Eduardo A. Zannoni y Gustavo A. Bossert publicado en la revista "Dictamen" en el mes de agosto de 1983 y que fuera gentilmente puesto a disposición por ellos a estos fines. De todas formas, correcto es indicar que el dicho proyecto sufrió modificaciones en algunos artículos siendo las más notables, en primer lugar, la supresión del anacrónico último párrafo del artículo 308 del Código Civil y en segundo lugar la que se refiere a la responsabilidad por hechos cuasi-delictuales de menores en donde se tomó en consideración el hecho objetivo de la guarda, antes que la tenencia conferida, atendiendo a los problemas que podrían suscitarse durante las visitas de padres a hijos o de hijos a padres separados, vacaciones y otras situaciones similares, asimismo, por ser la educación responsabilidad de ambos padres, se suprime la última parte del artículo 1.114 del Código Civil proyectado.

Eduardo Menem. — Libardo N. Sánchez.

2

Proyecto de ley de los señores senadores Amoedo y Saadi
El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Sustitúyese el artículo 264 del Código Civil por el siguiente:

Artículo 264. — La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que corresponden a los

padres sobre las personas y bienes de sus hijos desde la concepción de éstos y en tanto sean menores de edad y no se hayan emancipado.

El ejercicio de la patria potestad corresponde indistintamente al padre o a la madre.

En caso de divorcio o separación de hecho de los cónyuges el ejercicio de la patria potestad corresponderá a aquel que le hubiera sido atribuida la tenencia provisoria o definitiva del menor.

El ejercicio de la patria potestad del hijo extramatrimonial corresponderá a aquel que la hubiere reconocido voluntariamente, o al que hubiese sido declarado su padre o su madre. Si hubiese sido reconocido o declarado hijo de ambos, la patria potestad será ejercida indistintamente por cualquiera de ellos, siempre que vivan juntos.

Si los padres del hijo extramatrimonial fuesen menores no emancipados, su incapacidad será suplida de pleno derecho por el padre o la madre de ellos en ejercicio de la patria potestad, o bien por el tutor del progenitor que en forma habitual tenga al hijo bajo su amparo o cuidado, no obstante que el otro progenitor se emancipe o cumpla su mayoría de edad.

La tutela ejercida por el Estado en los términos del artículo 8º de la ley 10.903 suple, también, de pleno derecho la intervención de los padres o del tutor judicial.

Art. 2º — Derógase el segundo párrafo del artículo 308 del Código Civil.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Julio A. Amoedo. — Vicente L. Saadi.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto de ley tiene por objeto la sustitución del artículo 264 y la derogación del artículo 308 —segundo párrafo— del Código Civil.

La normativa propuesta tiene su antecedente inmediato en la ley 21.182, sancionada el 30 de septiembre de 1975 y que fuera vetada por el decreto 3.049/75.

La aludida ley instituyó un sistema, novedoso en nuestra legislación, referido al ejercicio de la patria potestad.

En el código de Vélez Sarsfield, el padre ejerce en forma exclusiva el derecho referido, con total exclusión de la participación de la madre en todo lo atinente a la formación, educación y conducción de los hijos. Tales conceptos se correspondían con el status jurídico de la mujer, vigente en la época de sanción del Código Civil.

La sanción de las leyes 11.357, 13.010 y 17.711 alteró en forma sustancial la situación descrita en el párrafo precedente, reconociendo a la mujer plena capacidad civil, quedando en consecuencia equiparada, en el plano jurídico, a la situación en la que se encuentra el hombre.

En razón de lo dicho, la situación actual, a más de ser discriminatoria, carece de sentido.

El ejercicio compartido de la patria potestad es la consecuencia lógica y natural de la transformación habida en nuestra legislación de fondo. La trascendencia del papel de la mujer en la educación y cuidado de los hijos hace necesario que se reflejen, en la legislación, situaciones que de hecho y en los casos de los matrimonios bien avenidos, se registran de facto.

Sin embargo, para aquellos casos en que exista sentencia de divorcio o separación de hecho, se propone que el ejercicio de la patria potestad corresponda a quien se le hubiera atribuido la tenencia del menor.

Esto es así, dado que la experiencia recogida en los innumerables procesos que sobre la materia se acumulan en nuestros tribunales, dan acabada cuenta del manejo abusivo de este derecho con la finalidad de utilizarlo como medio de presión tendiente a la obtención de otro tipo de concesiones.

En este sentido resulta a todas luces evidente que la reforma propuesta pone fin a este tipo de situaciones.

En mérito a la brevedad, nos remitimos a las fundamentaciones dadas por las señoras diputadas nacionales Nilda Celia Garré e Irene Graciela Román (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, año 1974, tomo VII, página 3824) y a los conceptos emitidos por el señor senador nacional don Alejandro Díaz Biale (Diario de Sesiones del Honorable Senado, año 1975, tomo IV, página 2348 y subsiguientes).

De lo dicho queda de resalto la constante preocupación de nuestro partido en la solución de situaciones que gravitan en el desenvolvimiento armónico de las relaciones de familia.

Julio A. Amoedo. — Vicente L. Saadi.

Sr. Presidente. — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Señor presidente, señores senadores: toca hoy al Senado tratar el dictamen de las comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad sobre proyectos vinculados al ejercicio de la patria potestad.

Este trabajo se inició en forma clara y concreta a través de la presentación de dos proyectos de ley por parte de los señores senadores Menem y Sánchez, en un caso, y Amoedo y Saadi, en el otro.

En esa labor se actuó con responsabilidad en atención a la importancia que este tema tiene en el derecho civil y a la profunda repercusión que acarrearán sobre la familia.

No se vaciló, señor presidente, en recurrir a los hombres que son vastos conocedores de nuestro Código Civil. Por eso invitamos a concurrir al ministro de la Corte doctor Augusto Belluscio, a los camaristas Eduardo Zannoni y Gustavo Bossert. También requerimos opiniones por escrito a los doctores Daniel H. D'Antonio y María Josefa Méndez Costa, titulares de la cátedra de derecho de familia y de minoridad de la Universidad Nacional del Litoral.

Fue una tarea ardua, en donde se puso por sobre todo, un empeño en realizar un trabajo de concepción universalista, de una profunda vocación al servicio de la familia, con una filo-

sófia al servicio del país en defensa de nuestra familia histórica, de una concepción del hombre y de la mujer que hemos aprehendido desde que comenzamos a mamar los pechos de nuestras madres y desde el reto solemne de nuestros padres. No solamente fue la escuela del derecho sino también el ejemplo de la vida, en donde todos tenemos nuestra historia y de la que tomamos, también, un aprendizaje empírico. Para legislar pensamos en nuestras madres, en nuestros hijos, en todas esas legiones de hombres y mujeres y, fundamentalmente, de hijos, de niños. Entonces, todos nos olvidamos de nuestras banderías políticas y dejó de hablarse de radicales o de justicialistas. Colgamos nuestras ideas políticas y nos pusimos al servicio del país para tener una mejor familia, una mujer dignificada en el panorama de la vida social, un hombre más humano y, por sobre todas las cosas, un hijo que deje de ser víctima de circunstancias y acontecimientos como los que hemos visto sufrir en ocasión de desavenencia de los padres y que han contribuido a deteriorar las relaciones familiares.

Es indudable, señor presidente, "que en el siglo veinte se ha agolpado una serie de acontecimientos científicos, de cuestionamientos de valores, de cambios de costumbres, una expansión vertiginosa de la técnica, dos guerras mundiales —agregándose a ello un permanente temor por una tercera— y, finalmente, un sistema económico que ha sometido bajo sus leyes al hombre de Occidente".

En esta complejidad de circunstancias se determina una nueva ubicación de la mujer en el mundo. Por esto, en Puebla, en 1979 se expresó: "...que entre las aspiraciones de liberación de nuestros pueblos se incluye a la mujer como signo de los tiempos que se fortalece en la concepción bíblica del señorío del hombre creado como varón y como mujer".

La socióloga Teresa Orrego, experta en el tema de las Naciones Unidas y de la CEPAL, piensa que el siglo veinte se ha caracterizado por la redefinición del papel de la mujer en la sociedad. Este cambio ha tenido lugar con una forma y un ritmo coherentes con el contexto cultural. Se trata de uno de los componentes más importantes del proceso de transformación que define a la sociedad contemporánea, ya que se dirige al núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. Esta opinión se encuentra condensada en un ejemplar de la revista "Carisma", en un artículo cuyo título es "La mujer", y que va desde la página 5 a la 10 vuelta.

De allí que durante toda esta época, a través de estos cambios políticos, económicos y

sociales y de la eclosión de la máquina en la vida económica, la mujer sale del seno de la familia, del hogar —que, aparte de constituir una unidad espiritual también lo es en el aspecto económico—; y ella, que prestaba sus servicios trabajando y coadyuvando a la economía de la casa como ama de esa unidad, debe salir a la calle a vender su esfuerzo por un salario. Así, la mujer deja su hogar en el que siempre trabajó y cumplió con los deberes de madre y esposa cuando le correspondió hacerlo; se dirige al mundo del trabajo, a librar la gran batalla del capital y del trabajo, a vender su esfuerzo por un salario. Va a luchar y a someterse, con una desigualdad que no solamente nacía de las leyes sino también del trato, de la consideración, de una sociedad que la tomaba, además de como un elemento de procreación, como una simple integrante de una legión de trabajadores.

“Su salario no valía igual que el del hombre. Su esfuerzo era titánico, pero no tenía la consideración y el respeto que la dignidad humana —no su calidad de mujer— merecía. De ahí que la mujer entre en una sociedad de consumo, dentro de un sistema laboral injusto y atrevido. De ahí que la mujer comience a ser la sierva de una sociedad que todavía no la ha liberado, una esclava, en el buen sentido de la palabra, de las circunstancias que la rodean.”

Ella es víctima no solamente de la ley, de las instituciones y de las circunstancias y acontecimientos del momento, sino también de una concepción que tiene el varón. Es la época en que el varón manda, dirige, peca y es absuelto, en la consideración social y en la ley, en tanto la mujer peca y es socialmente repudiada. La mujer sigue siendo madre, compañera, esposa, hija, el ser hacendoso, el ser del amor, el ser de la ternura, que sabe ser madre, novia y esposa. Pero sin embargo no es considerada como tal, y esas circunstancias van empujando día a día a que en el país y en el mundo empiece a haber movimientos de protesta, que tienden a dignificarla.

No se trata de meras protestas bullangueras. Si bien es cierto que hay grandes movimientos en pro de la mujer en todo el mundo, importantes acontecimientos que conmueven a la sociedad, manifestaciones que llenan estadios, hay otro acontecimiento más importante y fundamental: la mujer se va imponiendo en cuanto a la concepción de su condición humana ante el hombre, que por sobre todas las cosas es hijo, esposo y padre. Es quizás el lazo del amor frente a la injusticia lo que hace nacer una valoración del vínculo espiritual que hace reflexionar al varón y al mundo social sobre la mujer en los

ámbitos laboral, político —en lo específico— y en el mundo total.

Entre los años 1929 y 1961 se le concedió el voto a la mujer en veintitrés repúblicas latinoamericanas. Y esto se consagra como un programa del sufragismo, como efecto lógico del ascenso de las clases medias al poder a través de los partidos democráticos populares. Por este camino la nueva relación de la mujer con el mundo alcanza los primeros reconocimientos. “Todo esto fue acompañado por una literatura abstracta y humanista que no definía con claridad las causas del cambio ni los objetivos.

“La primera posguerra derribó las vallas defensivas del mundo victoriano y arrasó a su epifenómeno, el sensualismo de la bella época. Se instala una cultura juvenil de procedencia yanqui, cuyos rasgos más conocidos fueron la devoción a lo «sport», el éxito del dinero, un agresivo desape de los tabúes, siguiendo las pautas de Freud, que se difundió en esa época en todo Occidente.

“Latinoamérica, especialmente en sus clases medias y altas, recoge todo esto, y como decía Thomas Mann, fue el tiempo de los años 20 en que se bailó al compás del tango rioplatense, despidiéndose del pasado rural, y al compás del «charleston» gimnástico y sensual. Fue el inicio de la sociedad de consumo, que privilegió una actitud tan sensualista, en la que a título de liberación se contrabalanceó un concepto menoscabado de la mujer; a ella se le propuso una liberación de su antigua situación la que se le mostró como arcaica y esclavizante, y se le propuso un paraíso de liberación en el trabajo y hedonismo erótico”, tal como lo explica Jimena Allende a quien estoy glosando, escritora perteneciente al Movimiento Apostólico Católico de Schoenstatt.

Pero también fue positivo al concretar la posibilidad de estar presente en el mundo y considerar a la mujer apta para la cosa pública y para el trabajo digno del hogar. Se avanzó en la valorización de la persona creada con igual dignidad que el hombre.

“La década del 30, que hereda el colapso del 29, consolidó los estados fuertes y duraderos de izquierda y de derecha; bajo el imperio de esa crisis se condicionó al individuo en función del Estado como bien supremo. Varón y mujer fueron puestos como instrumentos para la preservación de la raza, según las confusas teorías de la época, pues tenían que servir como herramienta de trabajo y procreación en los planes del desarrollo del socialismo científico. La instrumentación de la mujer se podía observar ya sea en los desfiles moscovitas de jóvenes obreras como

en el concurso de muchachas alemanas para seleccionar a las arias puras.

"Así, los sistemas políticos hicieron de la mujer una pieza imprescindible de sus proyectos ideológicos. Esta moneda tiene otra cara: junto a la esclavización había una promesa implícita. La mujer, al mostrarse efectiva en la producción de bienes, estaba ganando un lugar nuevo en el conjunto de la sociedad, donde hasta entonces sólo reinaba el varón. Pese a la pobreza de las tareas, las mujeres demostraron ser competentes; aun más, mostraron ser imprescindibles para el nuevo sistema económico, político y social. Sabemos que la última Guerra Mundial demostró el gran valor de la abundante mano de obra femenina. Definitivamente, la mujer se convirtió en una asalariada y tomó mayor empuje la voluntad para liberarse de lo que consideraba una esclavitud de antigua data.

"En las ciudades de toda Latinoamérica la problemática femenina se hace más aguda. La mujer ingresa masivamente al trabajo industrial, a la oficina, a la ciencia y a la técnica empujada por las nuevas formas de vida. No es novedoso que la mujer trabaje. Ya lo hizo en el campo, en la vida rural o suburbana. Era la mujer quien atendía al grupo familiar, cuidaba animales, horneaba el pan, preparaba mermelada para el consumo familiar y para vender, y también fabricaba objetos de artesanía que luego comercializaba. Dos tareas al mismo tiempo: cuidaba de los hijos y contribuía al sostén del hogar."

Al ingresar luego al mundo del trabajo industrial percibe una remuneración; por eso el esfuerzo de la mujer pasa a formar parte de la inmensa red de la economía del dinero. En una sociedad de consumo esto significa un nuevo status, pues el valor de su esfuerzo laboral es medido por su salario, y luego el valor de ella como persona es medido con esa misma vara denigrante. "Antes trabajaba de la mañana a la noche envejeciendo con gran rapidez, pero tenía la tranquilidad de ser una mujer que no abandonaba a sus hijos y de ser la dueña y señora de la casa. Su modo de estar en el mundo era encontrándose en la casa, cultivando un modo social que giraba en torno a ella.

Al transformarse en obrera o empleada se sujetó a horarios que, en algunos casos, fueron menos desgastadores; mejoró su estándar de vida, pero tuvo que asumir una rutina alienante.

Julia Holm, socióloga de las Naciones Unidas, expresó sobre este tema en particular: "El cambio fue acompañado por unas relaciones de trabajo cada vez más impersonales y exigentes

que agravaron las dificultades de cambiar el papel de madre con el trabajo fuera de la casa".

Podemos terminar este estudio expresando que su relación con el mundo adquirió una inmensa complejidad debido a que asumió responsabilidades de trabajadora asalariada, como el varón, sujeta a un poder de dirección y disciplinario, el del empleador, sin dejar de lado sus obligaciones en la cocina, en la educación de sus hijos y en la administración de la casa. Por eso la mujer sigue siendo el "domus ruralis" sin sueldo, es decir que está desvalorizada, cumpliendo al mismo tiempo el rol de una trabajadora industrial con una remuneración que constituye una categoría de valorización del sistema imperante.

Las mujeres de bajos ingresos que residen en las áreas metropolitanas son quienes cumplen horarios de trabajo más prolongados, perciben los salarios más bajos, y por lo tanto insuficientes para resolver mínima y vitalmente los problemas económicos del hogar y tienen el índice más alto de rotación de empleo. Principalmente, son empleadas domésticas, categoría que en 1970 sumaba más de las dos quintas partes de las trabajadoras de la región latinoamericana, incluyendo otros servicios y actividades industriales.

Dos tercios de la fuerza de trabajo femenina está concentrada en los peores empleos; el tercio restante está compuesto por empleadas de oficina, sólo una pequeña minoría trabaja a nivel profesional y quehaceres científicos y técnicos.

Muchas mujeres trabajan por necesidad de aportar al sustento familiar ayudando a formar un monto suficiente a su marido; otras lo hacen para cubrir el tiempo libre que les queda debido a la tecnificación del hogar y, finalmente, otras por una real y efectiva valorización de su capacidad y sus condiciones naturales.

La mujer latinoamericana es llamada a integrarse a un mundo nuevo. Al respecto, pueden formularse dos planteos: el economicista y el sostenido por los cristianos. El primero considera que la sociedad agraria valoriza la maternidad por su función, lo que asegura la subsistencia. Si actualmente la técnica reemplaza los brazos humanos, la procreación resulta menos necesaria y, en consecuencia, el tiempo ahorrado permite que la mujer realice trabajos más útiles y productivos. La segunda perspectiva, la cristiana, enfoca a la maternidad como algo esencial a la mujer, aunque no reporte ganancia monetaria alguna, teniendo como argumento la

participación de la actividad creadora de Dios, siempre vigente, a la cual el orador adhiere y profesa.

No es posible cerrar los ojos a la situación histórica concreta y evadirse. El mundo de la mujer está en su hogar y está más allá de él; está en su casa y fuera de ella; está con el hijo y el esposo y también en el trabajo; está en un mundo nuevo, en un mundo complicado, donde debe salvar su dignidad de mujer y de ser humano. Por estas circunstancias el problema de la mujer no ha escapado al estudio de las organizaciones internacionales, ni al "aggiornamento" de la Iglesia, no solamente católica. No en vano las distintas corrientes filosóficas, desde el agnosticismo al cristianismo, o de derecha o izquierda, se han preocupado profundamente por la situación y la valorización de la mujer.

Señor presidente: vivimos en un mundo nuevo y, por lo tanto, es necesario crear un hombre nuevo; vivimos en una sociedad comunicada que debemos interpretar para poder reformar y ponerla al servicio del hombre, que es su único artífice y rey de la creación. Todo esto debe hacerse teniendo en cuenta la alta jerarquización de la personalidad humana y con un sentido social.

Ante las circunstancias que acabo de señalar, analizamos las disposiciones contenidas en el Código Civil. En esta oportunidad diré —y lo repetiré cada vez que se trate una modificación de nuestra legislación civil— que cualquier adaptación se realiza reconociendo siempre la tarea de nuestro codificador, Dalmacio Vélez Sarsfield. El Código Civil es una obra legislativa que luego de cien años de vida sigue teniendo la virtud de su grandeza.

El tema al que hoy se aboca el Honorable Senador es la modificación del ejercicio de la patria potestad, entendida como un complejo de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre sus hijos para protegerlos y formarlos con vistas al futuro. La evolución del concepto de patria potestad no puede escindirse de la que corresponde a los derechos de la mujer. Esta, pilar fundamental de toda familia, fue hasta no hace mucho tiempo una incapaz de hecho y por tal razón se encontraba en un nivel de desigualdad en relación con el jefe de la familia. Esa era la situación imperante en el momento de sancionarse nuestro Código Civil, y quedó plasmada en el inciso 2º del artículo 55, hoy derogado por la ley 17.711.

En las primeras décadas de este siglo aquel régimen de incapacidad de la mujer casada adoptado por el Código Civil comenzó a manifestar inconvenientes en relación con las necesi-

dades sociales. Eso dio lugar a la sanción, el 22 de septiembre de 1926, de la ley 11.357, conocida como de los derechos civiles de la mujer, que significó un poderoso avance para su época por su restricción de la incapacidad relativa que pesaba sobre la mujer.

La convención aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá el 2 de mayo de 1948 y ratificada por nuestro país mediante el decreto ley 9983/57, estableció en su artículo 1º que "los Estados americanos convienen en otorgar a la mujer los mismos derechos de que goza el hombre". Esta norma, que de conformidad con el artículo 31 de nuestra Constitución es ley suprema de la Nación, dio lugar a que parte de nuestra doctrina civilista considerara que tenía carácter operativo, lo cual implicaba la modificación de toda legislación interna a fin de adaptarla a sus preceptos.

Si bien esta interpretación no prosperó en la práctica, resulta hoy un antecedente valioso para el tratamiento del tema que aquí nos convoca.

El presidente de los argentinos manifestó el 11 de marzo de 1984 en el Foro Internacional de la Mujer, que "es deseo del gobierno nacional acabar con las injustas diferencias que discriminan el rol de la mujer en la sociedad argentina". En este aspecto como en muchos otros también las grandes mayorías nacionales y populares están contestes en producir una modificación que equipare a la mujer en los deberes y derechos en relación con el cuidado de sus hijos. Prueba de ello resultan los proyectos presentados y que hoy tratamos en este recinto.

Expresados estos antecedentes jurídicos, así como también la decisión política de la comunidad argentina de equiparar a ambos progenitores en el ejercicio de la patria potestad, analizaremos la reforma que aquí se propicia.

En doctrina dos son las formas posibles de ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la procreación. Pueden ser ejercidos en conjunto o en forma indistinta. El proyecto que consideramos propicia el ejercicio conjunto, porque nosotros entendemos que es la mejor solución, que armoniza con la realidad social argentina y responde a los antecedentes de la legislación comparada. Si bien ambos sistemas presentan consecuencias bastante similares, lo importante es determinar cuál es el principio y cuál la excepción en cada uno de ellos, pues de su comprensión derivará la sana interpretación que la magistratura sabrá dar a aquellos casos que puedan caer en las denominadas zonas grises.

Si el principio que se quiere establecer es la igualdad del hombre y de la mujer en cuanto

al ejercicio de la patria potestad, la solución no puede ser otra que ésta, según la cual los derechos y las atribuciones corresponden a los dos en conjunto. Contrariamente, cuando el ejercicio es indistinto, el principio es que cada uno de los padres ejerce individualmente la patria potestad, con excepción de determinados casos que expresamente se determinan. La legislación comparada ha receptado casi unánimemente el principio del ejercicio conjunto de la patria potestad.

Así, el código francés, reformado en 1970, establece como principio en su artículo 213, que los esposos aseguran juntos la dirección moral y material de la familia. El código belga, reformado en 1975, define en su artículo 373 que durante el matrimonio el ejercicio de la patria potestad corresponde conjuntamente al padre y a la madre.

En igual sentido, aunque con diferencias idiomáticas, se manifiestan la ley civil de Holanda, en su artículo 246; de Alemania Federal, en el artículo 1.627; de Italia, en su artículo 316; de España, en el artículo 156, y de Portugal, en su artículo 1.401.

Esta solución es también la receptada por los países del Este, entre los que cabe señalar a la Unión Soviética, Yugoslavia y Alemania oriental.

Nuestros hermanos latinoamericanos adoptan asimismo esta posición. A título de ejemplo podemos mencionar el Código Civil del distrito y territorio federales de México, en su artículo 414; la ley uruguaya 10.783, en el artículo 11; el Código Civil colombiano, en su artículo 62 y la normativa de Costa Rica, Bolivia, Guatemala y República Dominicana.

Entre los antecedentes nacionales no podemos omitir que la inquietud de reformar el régimen del ejercicio de la patria potestad ya fue motivo de preocupación en el período constitucional que precedió al nefasto proceso llamado de reorganización nacional ya que este Honorable Congreso en el año 1975 sanciona la ley 21.182, que consagraba el ejercicio indistinto de la patria potestad y que fuera vetada.

Es necesario indicar también, señor presidente, como antecedente legislativo entre los muchos que existen, un proyecto presentado a la Honorable Cámara de Diputados por el actual secretario legislativo del Senado, Antonio J. Maris, en el año 1973, en la sesión del 6 de junio. Manifestaba expresamente que tenía que sustituirse el artículo 264 del Código Civil por el que leeré a continuación: "La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos, desde la concepción de és-

tos y en tanto sean menores de edad y no se hayan emancipado. El ejercicio de la patria potestad de los hijos corresponde conjuntamente al padre y a la madre, y en caso de desavenencia resolverá el juez por la vía sumarísima. Si el hijo no fuere reconocido por el padre, el ejercicio de la patria potestad sólo será ejercido por la madre". Y así siguen los artículos de este proyecto. Lo menciono como un hecho categórico de los últimos años de este proceso legislativo junto a muchos que hoy escapan a mi memoria.

El punto a considerar seguidamente se orienta a determinar si resulta conveniente modificar el principio, dejando librada a la prudencia judicial, la interpretación de qué normas continúan en vigencia y cuáles otras quedan tácitamente derogadas, o bien proceder a reformar todo el articulado perteneciente a la ley civil.

Las comisiones dictaminantes, con la invalorable colaboración de prestigiosos juristas de nuestro medio, que ya han sido nombrados en mi exposición, han considerado que resulta más adecuado a una buena técnica legislativa la reelaboración de todas las normas vinculadas con la modificación del ejercicio de la patria potestad. Sin embargo, quedará como siempre a la prudencia y capacidad de nuestros jueces la resolución de aquellos casos no contemplados en la norma. A continuación leeré un trabajo que he confeccionado sobre el tema, adoptando dicho método por lo delicado del tema.

"Entramos ahora en el análisis pormenorizado de la reforma. La modificación del artículo 264 del Código Civil adopta como conceptualización liminar que la patria potestad es un conjunto de derechos y deberes que corresponden a los padres, lo cual precipita su consecuencia en el orden de la titularidad y el ejercicio de la institución.

"Si bien en la doctrina nacional la naturaleza jurídica de la patria potestad ha recibido distintas definiciones, tales como poder familiar, función, poder-función, derecho subjetivo, conjunto de derechos y deberes y derecho natural —posición esta última que ha sido sentada por nuestra Corte de Justicia— consideramos que el mantenimiento de la naturaleza jurídica de la institución, como el conjunto de derechos y deberes, se corresponde con la realidad social argentina. Sin embargo, al considerar que la finalidad de la patria potestad está orientada a la protección y formación integral de los hijos, su objetivo primordial resulta la protección de la minoridad natural y de la legalmente puesta a cargo de los progenitores. Si bien en una reforma posterior o al tratarse la temática de un código de familia y del menor como rama autónoma del derecho civil podrá reconsiderarse este

concepto, hasta tanto no llegue ese momento creemos que la solución propiciada es la más acorde a los tiempos que vivimos.

"Con relación al ejercicio de la patria potestad la norma que analizamos trata de cubrir todos los supuestos posibles: la existencia de matrimonios desavenidos, las separaciones de hecho, la existencia de hijos no nacidos del matrimonio, todos los cuales constituyen un dato de la realidad que el legislador no puede ignorar. Aunque dichas circunstancias sean dolorosas, para tales casos la norma proyectada tiende a dar una adecuada solución que conjugue primordialmente la defensa de los intereses del menor y permita un menos traumático desarrollo de su crecimiento o de su evolución.

"La incorporación del artículo 264 bis tiende a resolver el problema que se suscita cuando los padres sean incapaces, estén privados de la patria potestad o suspendidos en su ejercicio.

"Con referencia a los disensos que puede provocar el ejercicio de la patria potestad, el artículo 263 ter establece la vía judicial para la cual, y con el procedimiento más breve, se resolverá lo más conveniente para el interés del menor.

"El ejercicio conjunto de la patria potestad parte del principio de que en las denominadas cuestiones domésticas, la decisión de uno de los progenitores presume el consentimiento tácito del otro, salvo oposición expresa en contrario. Esta presunción debe ceder en los casos en que la trascendencia de la decisión a adoptar implique una orientación fundamental en la vida del menor, a cuyo fin el proyectado artículo 264 quater establece los supuestos en los que el consentimiento deberá ser expreso para su realización por quienes ejerzan la patria potestad. En este caso también la prudencia judicial podrá salvar la negativa injustificada de uno de los progenitores o la imposibilidad de alguno de ellos para prestar el consentimiento.

"La reforma del artículo 265 tiende a puntualizar el real sentido de la patria potestad, modificando el concepto de «poder», reemplazándolo por el de «cuidado», con lo cual se da el verdadero significado a esta institución del derecho civil. Asimismo, se elimina del artículo la facultad de elegir la profesión de los hijos, toda vez que ello no responde a la realidad actual.

"En el artículo 269 se reproducen adaptaciones terminológicas, reemplazando las palabras «casa paterna» por «hogar», y «suministros» por «provisiones». Esta norma se complementa con la reforma del artículo 284.

"El artículo 271 proyectado hace extensivo a ambos progenitores el deber de dar alimentos, independientemente de quien ejerza la guarda,

ampliando así el concepto restringido de la actual redacción. Esta norma se complementa con la reforma del artículo 272.

"La responsabilidad de los padres por los actos ilícitos de los menores sometidos a su patria potestad queda ampliamente completada y cubierta en los artículos 1.114 y 1.116 del Código Civil y, por lo tanto, la derogación del artículo 273 se impone para evitar una superposición de normas.

"Debe destacarse que en esta reforma también se actualiza a la luz de la doctrina y la jurisprudencia, el primero de los artículos precitados.

"Se ha proyectado también la modificación del artículo 275 para adaptarlo terminológicamente a la nueva concepción de la institución patria potestad. Esta adaptación no restringe ni altera la concepción del artículo 128 del Código Civil, con las modificaciones establecidas por la ley 17.711.

"Igual adaptación terminológica se establece en el artículo 276.

"En cuanto al artículo 278, si bien no se vincula estrictamente a la reforma que modifica el ejercicio conjunto de la patria potestad, su modificación resulta adecuada en esta instancia para eliminar la posibilidad de detención del menor en establecimientos correccionales, la cual, además de no ser utilizada en la práctica ha sido unánimemente censurada.

"Por considerarse sumido en el artículo 282, se propone la derogación del artículo 281, modificándose el primero de ellos, adaptándolo al nuevo ejercicio de la patria potestad.

"En el artículo 283 se sustituye el concepto de «hijos de familia» por «menores», y se incluye a todos los empleos, no sólo a los públicos, como se encuentra legislado en su actual redacción, estableciéndose además la remisión del artículo 131, reformado por la ley 17.711.

"El artículo 284, en su actual modificación, aclara y complementa su similar 269, estableciéndose las normas y los procedimientos que deberán seguirse para proveer a las necesidades urgentes de los menores ausentes del hogar, con autorización de los padres.

"En el artículo 285 se adapta la terminología, sustituyendo los conceptos de 'hijos de familia' por 'menores' y 'licencia del juez del territorio' por 'autorización del juez'.

"Igual tratamiento merece el artículo 286, en el que se reemplaza 'hijos de familia' por 'menor' y 'disposiciones de última voluntad' por 'testar'.

"Entrando en el análisis de las consecuencias patrimoniales que origina el ejercicio conjunto de la patria potestad, el artículo 287 se adapta a la siguiente modificación: a) otorga el usufruc-

to por mitades a ambos progenitores, cuando los dos tienen la patria potestad; b) incluye el caso de los hijos extramatrimoniales, en forma concordante con el artículo 11 de la ley 14.367; c) se modifican los actuales incisos, reformulando los incisos 1) y 2) en el 1) y se suprime el inciso 3), reformulando el inciso 4), que pasa al inciso 2), cambiando la expresión 'incapacidad del padre por ser heredero' por las causales expresadas de pérdida de vocación hereditaria, es decir, 'la indignidad y la desheredación'. Además, se incorpora en el inciso 3) la norma contenida en el artículo 289, la cual no justifica su separación. Esta última modificación impone la derogación del artículo 289 por su inclusión en el artículo precitado.

"El artículo 290 adapta la terminología, reemplazando el concepto de 'el padre' por 'los padres'.

"Con relación a la administración de los bienes, el artículo 293 sigue en este aspecto los lineamientos tenidos en cuenta al modificar el artículo 287. Esta norma se complementa con lo legislado en el artículo 294, el cual recepta, en el primer párrafo, las normas del código italiano y, en el segundo, las del derecho mexicano y costarricense, toda vez que se ha creído conveniente establecer normas que permitan agilizar la administración de los bienes de los menores. A tal fin se han desglosado de los actos de administración los simplemente conservatorios, siguiendo en este sentido la clasificación del maestro Orgaz, cuya reciente desaparición hemos lamentado profundamente todos los senadores.

"Para los actos conservatorios, se faculta su otorgamiento indistinto, lo cual nada altera el principio general del ejercicio en conjunto.

"La modificación del artículo 295 produce una adaptación terminológica, reemplazando el vocablo 'padre' por el de 'padres'.

"La doctrina civilista argentina, desde los primeros exégetas hasta hoy, ha manifestado que el artículo 297 del código de Vélez refleja una traducción infiel de su precedente, contenido en el proyecto del código brasileño preparado por Freitas en el siglo pasado.

"Es oportuno, entonces, retornar a las fuentes. La modificación propuesta se fundamenta en la necesidad de señalar los actos absolutamente prohibidos para los padres de aquellos en que la prohibición es relativa, por cuanto puede ser levantada con la previa venia judicial.

"Si bien se recepta el artículo 1.537 del proyecto de Freitas se adopta su terminología reemplazando 'transacción privada' por 'partición privada' y además se hace extensivo el con-

cepto a toda clase de bienes; todo ello sin perjuicio de la norma específica referida al ganado, que se encuentra legislada en el artículo 298, norma ésta que a su vez se adapta haciéndola concordar con la reforma del artículo 297.

"El artículo 303 se modifica de tal modo de adaptarlo a la modificación propuesta en el artículo 264, es decir, compatibilizándolo con el ejercicio compartido de la patria potestad. Toda vez que el caso de viudez queda comprendido en la modificación del artículo 264, resulta innecesario el mantenimiento del actual artículo 305, por lo cual se propicia su derogación.

"La modificación en el artículo 306 toma como fuente al código español en su artículo 169 y, de este modo, resuelve un problema no definido en la legislación vigente, el cual se presenta en el caso en que la adopción se efectúa con una filiación anterior conocida. Con tal motivo se incorpora entre los casos en que la patria potestad se acaba, siguiendo de esta manera el antecedente español pero aclarando que la misma puede ser restituida si la adopción se anula o se revoca. Asimismo se establece que la privación de la patria potestad no es requisito previo para la adopción, sino que su conclusión es consecuencia de ésta.

"A su turno el artículo 307 tiende a precisar las causales de pérdida de la patria potestad contempladas en el texto vigente, englobando en la definición de privación de la patria potestad tanto la pérdida de la patria potestad como la de su ejercicio, actualmente contempladas sucesivamente en los artículos 307 y 308, cuya separación no se justifica, e incluyendo también las del segundo párrafo del artículo 309.

"La doctrina considera que la única distinción fundamental entre pérdida de la patria potestad y pérdida de su ejercicio radicaría en que la primera es irreversible y la segunda no. Sin embargo, no parece conveniente adoptar el criterio de irreversibilidad absoluta sino dejar la cuestión librada a la apreciación judicial, ya que ni siquiera en los casos más graves puede desecharse de plano la posibilidad de enmienda de la conducta de los progenitores en el prolongado lapso que puede transcurrir hasta que los hijos sean mayores de edad.

"El inciso 1º del artículo 307 constituye la reforma del actual, adaptando el artículo 378 del código francés, que contempla no sólo el caso del progenitor que comete delito contra el hijo, sino también aquel en que el padre y el hijo delinquen juntos. El inciso 2º se refiere exclusivamente al abandono suprimiendo la alusión del texto actual a «la exposición». Se clarifican así

los conceptos, ya que la exposición no sería sino el grado máximo de abandono.

"Por otra parte, para evitar la hesitación de la jurisprudencia, se aclara que no deja de haber abandono por parte de uno de los padres, por el hecho de que lo abandone en poder del otro o éste lo recoja. En ambos casos se hace referencia a alguno de los hijos, para dejar también aclarado que el hecho relativo a uno de ellos priva de la patria potestad respecto de todos. Concuere con el artículo 379 del código francés, que establece que la pérdida se extiende a todos los hijos menores ya nacidos al tiempo de la sentencia. El inciso 3º comprende al actual artículo 307 inciso 3º, el artículo 308, primera parte, y el 309, segundo párrafo, adoptando una forma similar a la del artículo 378-1 del código francés. Se la ha preferido por sobre las más latas de los códigos español e italiano, que aluden al grave incumplimiento de los deberes paternos.

"Con relación al artículo 308, para compatibilizarlo con la modificación propuesta al 306 y con la normativa establecida en el artículo 12 de la ley 10.903, se propone su supresión, efectuando el reemplazo por el acordado en comisión, teniendo presente que aquí ya no se establece ningún plazo para que pueda pedirse la restitución de la patria potestad; simplemente se exige que medien circunstancias nuevas, cuya apreciación quedará librada al juez, siendo ellas justificadas siempre que beneficien al menor en sus intereses materiales y espirituales.

"En cuanto a la reforma del artículo 309, se consideran las causas de suspensión del ejercicio de la patria potestad, teniendo en cuenta la modificación establecida por la ley 10.903. En el segundo párrafo se admite la suspensión para el caso en que el hijo sea entregado a un establecimiento tutelar, lo cual se compadece con el resto de la modificación propuesta.

"En el artículo 310 se adapta el texto de las modificaciones propuestas para los artículos 307, 308 y 309. Tal como lo anticipáramos cuando tratamos el artículo 273 y su derogación, se modifica el artículo 1.114 y, a la luz del ejercicio conjunto de la patria potestad, se incorpora la responsabilidad solidaria de los padres frente a terceros por los hechos ilícitos cometidos por sus hijos menores. En este caso queda comprendida, inclusive, la excepcionalidad en el caso de que el hijo conviva con el progenitor que se encuentre privado de la patria potestad. Tratándose de casos de divorcio o de anulación de matrimonio se adopta como criterio el de responsabilizar a quien ejerce la guarda.

"En la normativa del artículo 149 se incorpora a la madre como posible curadora provisoria del demente. Teniendo en cuenta las modificaciones de leyes complementarias del Código Civil, se propone la sustitución y reemplazo del artículo 10 de la ley 2.393; del 13 de la ley 10.903; del inciso 3º del artículo 19 de la ley 14.394; del artículo 12 del Código de Comercio y del artículo 7º de la ley de facto 22.278.

"Por todo esto, señores senadores, al propiciar la reforma al régimen de patria potestad y al efectuar la correspondiente solicitud para su aprobación, se debe tener en cuenta un hecho categórico y concreto. Hemos considerado que la unión del hombre y la mujer es física y espiritual; precisamente, al referirnos a lo espiritual aludimos a la entrega voluntaria y total tanto de uno como de otro, de una unión armoniosa, de tolerancia, de mutuo respeto, de diálogo, de conclusiones, de creación de un mundo cultural privado —que es la cultura familiar— y de un sinnúmero de interrelaciones no materiales que concreta, sin lugar a dudas, una comunidad de amor a la que le damos una concepción jurídica.

"De allí surge que la familia sea la base fundamental de nuestra sociedad y, por ello, la familia actual, denominada conyugal constituye una unidad compuesta por el matrimonio y sus hijos, con residencia independiente dentro del seno de la sociedad, no siendo ahora tan extensa, como lo era mucho tiempo atrás.

"Entonces, en esa comunidad de amor, el hombre y la mujer deben estar en un plano de igualdad; no se puede imaginar una comunidad de este tipo sin que ello ocurra así porque de ese plano de igualdad, de esa comunidad de amor, surge un fruto, que es el hijo. Ese hijo, fundamentalmente, es el bien jurídicamente protegido por esta legislación que queremos implantar: ese hijo proveniente de esa comunidad, a quien tenemos que proteger, hacerlo hombre y servidor de una sociedad y artífice de un destino nacional.

"De ahí, señor presidente, que hayamos recibido todos los dictámenes que nos proporcionaron los hombres que hemos consultado. Hemos trabajado prolijamente, con tesón, con gran responsabilidad y con humildad. No trepidamos en consultar. Hemos hecho comparecer a ilustres letrados, y con ellos tuvimos verdaderas reuniones de trabajo, con versiones taquigráficas en las que consta su pensamiento. Hemos consultado libros, escritos de hombres de derecho, filósofos y religiosos.

"Unos y otros, radicales y justicialistas, actuamos en este debate como argentinos desprendidos de nuestras ideas políticas, pero cumpliendo un mandato histórico con el cual nos compromete-

timos en nuestras plataformas, el mandato de dignificar a la mujer, de llevarla al plano de la igualdad jurídica y de la igualdad social. Por eso yo, como radical, y también mis amigos como justicialistas, y —¿por qué no?— los hombres de los partidos provinciales, que también pregonaron sus ideas a través de sus plataformas electorales y de su docencia cívica, nos sentimos contentos. Estamos cumpliendo con un mandato histórico.

"Quizás esto no sea perfecto, señor presidente. Quizás no sea atrevido. Es obra de albañiles del derecho. No somos arquitectos, no vamos a dictar cátedra, pero recogemos las inquietudes de la calle, y sin temor, aunque con la responsabilidad de legisladores, nos acercamos a los hombres que saben construir la norma.

No hemos tenido el atrevimiento de los que van abriendo la cañada de la problemática social. Procedimos con la sinceridad y la honradez de los hombres de bien, procurando preservar una lección de vida que aprendimos: una familia que queremos, que viene desde la época de la colonia, que fue alimentada con la sangre de los gringos, que creció en nuestras pampas y en nuestras ciudades, que supo de la tragedia de sus madres trabajadoras y perseguidas y de sus padres sin trabajo; una familia que supo amasar la dignidad del país de nuestros abuelos, que no sabían leer ni escribir, que transmitieron su dignidad a sus hijos y nietos y que fueron los artífices morales de una sociedad que, con todos sus errores y defectos, se puede jactar ante el mundo de ser una de las más morales y éticas, una de las más probas y heroicas.

Los representantes de los Estados federales rendimos hoy aquí, en nombre de los pueblos que nos eligieron, un homenaje a esas heroicas mujeres. Algunas llegaron a ser líderes. Otras, en el anonimato del trabajo de todos los días, se doblaron el espinazo lavando ropa y enseñando las primeras letras a sus hijos. A la mujer, que es nuestra madre, nuestra esposa, nuestra hija, nuestra compañera, a quien más de una vez hemos visto humillada en la historia, y a quien siempre hemos amado y servido, hoy le venimos a reparar el oprobio y la indignidad que más de uno cometieron, creando un instrumento al servicio del hombre, para de esa manera mejorar nuestra sociedad.

De este modo lograremos en el país mujeres sonrientes y responsables, que junto con nosotros van a lograr el país que queremos realizar. Sin lugar a dudas, pese a las contingencias y a las desventuras, vamos a construir ese país porque nos une más el amor a la patria que nuestras re-

yertas internas. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: no cabe duda de que el Honorable Senado de la Nación trata hoy uno de los proyectos de ley más importantes que le han sido sometidos a su consideración desde la reinstauración del sistema democrático.

Este proyecto de ley modifica disposiciones referidas al régimen de la patria potestad, contenidas en el articulado del título III, sección segunda, libro primero del Código Civil.

La medulosa y extensa exposición leída por el señor miembro informante de las comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad hace innecesario abundar en mayores consideraciones sobre este asunto, pues ha avanzado tanto en los antecedentes históricos como en el análisis profundo de cada una de sus disposiciones.

Pero como coautor —junto con mi compañero de bancada y de provincia, el senador Sánchez— de uno de los proyectos presentados y sobre la base del cual ha elaborado su dictamen la comisión, tomado también del proyecto de otros compañeros de bancada, los señores senadores Saadi y Amoedo, me obligan moralmente a formular algunas reflexiones sobre este importante tema, para aportar algunos sucintos puntos de vista, procurando no superponer mi exposición con la del miembro informante.

En primer lugar quiero señalar el elogiable trabajo realizado por las comisiones que han tratado nuestro proyecto. Pienso que es uno de los temas que ha sido más elaborado, no sólo por los integrantes de las comisiones y sus asesores, sino que también se ha recurrido a los más prestigiosos juristas, especialistas en la materia y en derecho de familia, quienes han realizado importantes aportes que no sólo han aclarado nuestro proyecto sino que lo han enriquecido, introduciendo disposiciones de gran valor y de significativo alcance.

Me voy a permitir repetir —tengo la obligación moral de hacerlo— que algunos de esos prestigiosos juristas, que hoy nos honran con su presencia en esta sala, los doctores Belluscio, Zannoni y Bossert, han volcado en nuestro proyecto el fruto de largos años de estudio. Y sobre este particular, quiero señalar también que el proyecto presentado junto con el señor senador Sánchez fue elaborado teniendo en cuenta un trabajo realizado por los juristas Eduardo Zannoni y Gustavo Bossert, quienes lo pusieron a nuestra disposición. Este trabajo ha servido de base a nuestro proyecto.

Includablemente, esta situación que hoy tratamos y que —como muy bien lo ha señalado el miembro informante— trata de colocar a la mujer en una situación de igualdad jurídica respecto del hombre en las relaciones paterno-filiales, tiene un presupuesto fundamental: el interés de los hijos. Creo que este aspecto no debe perderse de vista. Se habla de la igualdad jurídica de la madre y del padre, pero debemos enfatizar que ésta tiene por finalidad la protección de los intereses de los hijos.

Este proyecto que estamos considerando coloca en un plano de igualdad al hombre y a la mujer en el ejercicio de la patria potestad y responde a una concepción ética de la familia, donde se plantean relaciones de subordinación de los hijos respecto de los padres y relaciones de igualdad de los padres entre sí.

Recientemente, en un congreso científico en el que se trató este tema se señaló —y me voy a permitir reiterar el concepto— que en una sociedad y estado democráticos, que pretenden ser afirmados todos los días, resulta incompatible mantener a la célula primaria —la familia— en una situación autocrática. Esto fue tenido en cuenta para la redacción de este proyecto que modifica la institución de la patria potestad. Esta ha sufrido una larga evolución a través de la historia. En la familia romana, el “pater familias” era quien detentaba poderes omnímodos; tenía derecho a la vida y muerte de los hijos ya que podía venderlos, castigarlos o matarlos. En esa sociedad la patria potestad constituía uno de los cuatro grandes poderes del “pater”, que ejercía no solamente sobre los descendientes sino también sobre todo lo que integraba el grupo familiar. Recordemos que era un verdadero pontífice que tenía a su cargo, inclusive, el culto de la familia.

En la medida en que la sociedad y la familia fueron evolucionando, los poderes absolutos del “pater familias” disminuyeron. Al mismo tiempo, funciones propias de la célula primaria se fueron desprendiendo en beneficio de la sociedad. Así vemos que en la Edad Media, por influencias del cristianismo, se morigeraron los poderes del padre. La autoridad paterna no se debilitó sino que se atenuó en beneficio de una mayor participación de la madre en las relaciones paterno-filiales.

La Revolución Francesa abolió la institución de acuerdo con la acepción romana, suprimiendo la autoridad paterna y atendiendo fundamentalmente la protección de los hijos. No estamos ante un poder onnínodo sino ante un padre que ejerce con autoridad las relaciones paterno-filiales, cumpliendo su deber de protección.

Vemos así que la patria potestad ha sufrido una de las evoluciones más grandes en el ámbito del derecho de familia. Ello se explica porque nació a la vida como un privilegio, como un poder, y no es más que una función. Así lo sostiene el profesor panameño Cano Llopis en su *Derecho de sucesiones y de familia*.

La constante de esta evolución ha sido entonces la disminución de los poderes autocráticos del padre en beneficio de las facultades de la madre, integrados todos en una comunidad familiar armónicamente organizada.

Y nuestro Código Civil no podía ser la excepción en esta materia. Vélez Sarsfield, a quien hizo referencia el miembro informante, según las ideas imperantes en la época, concebía a la patria potestad únicamente como un conjunto de derechos concedidos al padre. Adviértase que en la definición del artículo 264 no se habla de obligaciones, sino simplemente de derechos, aunque en las distintas normas del Código se establecen algunas obligaciones a cargo del padre. Otra característica es que está referida exclusivamente a los hijos legítimos, es decir que no se contempla la patria potestad sobre los hijos extramatrimoniales. Además, la madre ejerce la patria potestad únicamente en caso de muerte del marido. Esta posición es coherente con todo el sistema del Código, ya que la mujer casada era considerada incapaz relativa de hecho por imperio del artículo 55, inciso 2) del mismo cuerpo legal.

Pero el propio Vélez Sarsfield, no obstante la posición en que colocaba a la madre en materia de patria potestad, ya advertía la evolución que venía sufriendo esta institución y se adelantaba a su tiempo. En la recordada nota al artículo 305 del Código, al justificar la transferencia de la patria potestad a la madre en caso de muerte del padre y en contraposición a algunas legislaciones extranjeras según las cuales en ese caso la patria potestad terminaba, es decir que ni aun en ese caso pasaba a la madre, dice Vélez Sarsfield como una premonición: “Esta era la marcha natural de la civilización, elevando, contra las más antiguas costumbres, la condición de las madres de familia. El derecho ha marchado también, y acabará por ser reconocida en los países cultos la necesidad y conveniencia de poner a la madre en sus relaciones de derecho, a la par del padre”.

Esta premonición de Vélez Sarsfield se fue cumpliendo a través del tiempo; por ejemplo, con la ley 10.903 de 1919, llamada ley del patronato de menores, que modifica la definición legal e incluye expresamente las obligaciones, al extender la patria potestad a los hijos extra-

matrimoniales, aunque regulándola en forma deficiente. Después viene la ley 14.367, del año 1954, que si bien no se refiere expresamente al tema, extiende la patria potestad a los hijos incestuosos y adulterinos, cuya calificación suprime, pues pasan englobados a integrar el concepto de hijos extramatrimoniales, a los cuales, por cierto, alcanza la patria potestad. También establece esta ley que en caso de renunciamento voluntario se extiende al padre extramatrimonial el derecho de usufructo.

Por último llegamos a la ya mencionada ley 21.182, sancionada en 1975 y vetada por decreto 3.049 del 22 de octubre de ese mismo año.

Alguien se preguntó por ahí cómo es posible que en el Año Internacional de la Mujer este proyecto modificador de la patria potestad fuera vetado precisamente por una mujer que ejercía la presidencia de la Nación.

Considero, al igual que la mayoría de la doctrina, que se procedió correctamente al vetar esta ley 21.182, porque si bien constituía un avance en cuanto al establecimiento del ejercicio indistinto de la patria potestad, resultaba una norma harto insuficiente en la materia, ya que se limitaba a modificar sólo el artículo 264 del Código Civil, dejando indemnes una serie de disposiciones relacionadas también con esta institución, que de esta forma quedaban desajustadas con respecto al principio nuevo que se establecía.

Por otra parte, se determinaba el ejercicio indistinto de la patria potestad, pero no se contemplaban casos especiales que era muy peligroso dejar librados sólo al ejercicio indistinto. Podía darse la situación de que resultara premiado el progenitor que fuera más veloz en acordar la autorización para actos que podían ser muy importantes para la formación, el futuro, la educación o los intereses económicos del menor.

Llegamos así, señor presidente, al proyecto de ley que estamos considerando hoy, que, como expresara el miembro informante, establece el ejercicio conjunto de la patria potestad.

Quiero hacer una aclaración de tipo terminológico con relación a lo expuesto por el señor senador de Entre Ríos, quien en alguna parte de su discurso se refirió a la patria potestad compartida. En realidad, la patria potestad compartida vendría a ser el género, mientras que la patria potestad conjunta o indistinta vendría a ser la especie.

Es necesario distinguir correctamente estos conceptos. Tanto en la patria potestad conjunta como en la indistinta se trata de patria potestad

compartida. Pero en este caso concreto, de acuerdo con la terminología adoptada por el proyecto en consideración, se habla de ejercicio conjunto de la patria potestad, que no debe ser confundido —como expresé recién— con el compartido, pues éste comprendería también al indistinto.

Se han contrapuesto aquí dos sistemas: el del ejercicio indistinto y el del ejercicio conjunto de la patria potestad. Se suscitó una larga discusión, inclusive dentro de las comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad, con respecto a cuál era el mejor sistema. Con un sentido práctico, se buscó una solución que conciliara ambos tipos. Creo que la fórmula lograda es tan acertada que elimina en la práctica toda distinción entre ambos sistemas.

Se arribó a esta situación porque al principio del ejercicio conjunto se le adosó, digamos así, una presunción legal en el sentido de que todo acto realizado por uno de los progenitores se entiende que cuenta con el consentimiento del otro. Si comparamos esto con lo que significa el ejercicio indistinto de la patria potestad —en cuanto a que cualquiera de los cónyuges puede autorizar a realizar el acto— y observamos que en este caso es conjunto, pero con la presunción de que cuando uno actúa lo hace con el consentimiento del otro, veremos que en los hechos estamos hablando, prácticamente, en los mismos términos. Es decir que funciona en forma similar.

Creo que no conviene profundizar más en un problema muy teórico, de mucha sutileza, por cuanto —como dije— en la práctica nos encontraremos con los mismos resultados. A partir de ahí se introduce una serie de modificaciones a los principios de la patria potestad, cuya mención ha hecho con claridad el miembro informante, lo que me exime de mayores consideraciones.

El señor miembro informante se ha referido a lo que sucede en materia de usufructo. Se incluye la división por mitades entre los padres y el usufructo de los bienes de los hijos extramatrimoniales voluntariamente reconocidos, haciéndose eco de la reforma que ya había introducido el artículo 11 de la ley 14.367. Se refunden los actuales incisos 1) y 2) por tratarse de situaciones similares; se suprime el inciso 3) porque ha sido unánimemente criticado por la doctrina y que se refiere al caso de las ganancias del menor derivadas de juegos o apuestas. Se aclara el inciso 4), que se refiere a las incapacidades para heredar, por indignidad o desheredación. Se incluye como inciso 3) el actual

artículo 289, ya que no se justifica que este caso se contemple por separado, y se deroga el artículo 289 por esa misma razón, al pasar a formar parte como inciso 3) del artículo 287.

Es muy importante la modificación que se instituye en lo que hace a la administración de los bienes. Lógicamente, modificado el régimen de la patria potestad, se producen efectos en materia de administración de los bienes, ya que se le da la administración conjunta a ambos padres. Se excluyen de la administración, por una razón de orden legal, los bienes cuyo usufructo no tengan los padres. A su vez, se incluye la regla del artículo 294 actual, que coincide con el inciso 3) en el caso del usufructo.

Se establece el principio de la administración común para los padres cuando ambos están en ejercicio de la patria potestad y se fija el principio de que para los actos meramente conservatorios, que no tienen mayor trascendencia patrimonial, puede actuar indistintamente cualquiera de los padres, siguiendo en ese aspecto los fundamentos del Código italiano. Para hacer más práctico el ejercicio de la administración, se autoriza a los padres a designar de común acuerdo un administrador de los bienes de los hijos, siguiendo las previsiones de los códigos de México y Costa Rica. A su vez se establece que en caso de graves desacuerdos entre los padres respecto de la forma de llevar la administración, el juez podrá designar a uno de ellos administrador.

Por último, también es muy importante la modificación que se introduce —a título de aclaración— con respecto a los actos que estén prohibidos en forma absoluta para los padres, como por ejemplo comprar bienes de sus hijos ni siquiera en remate público ni con autorización judicial. Se separan de esos actos los que pueden realizar los padres con autorización judicial y se establece como principio fundamental la necesidad de aquella autorización para poder vender bienes de cualquier clase.

También es importante la distinción que se hace en los casos de extinción de la patria potestad, privación y suspensión de su ejercicio, porque en el sistema que nos rige actualmente se distingue la extinción —que ahora se mantiene— de la pérdida de la patria potestad y la pérdida del ejercicio de la suspensión del ejercicio.

Siguiendo en esta cuestión un consejo del doctor Belluscio, la comisión engloba los casos de pérdida de la patria potestad y pérdida del ejercicio en un mismo calificativo: el de privación de la patria potestad.

El señor miembro informante ha relatado minuciosamente cuáles son los casos de extinción de la patria potestad, de su privación y de la suspensión de su ejercicio. Sólo cabe agregar que se introduce como causa de extinción de la patria potestad la adopción del hijo en cuyo caso, por cierto, cesa la patria potestad pero se deja abierta la posibilidad de que los padres puedan recuperarla en caso de que quede sin efecto la adopción.

Señor presidente, señores senadores: no quiero abundar en este tema que ha sido tan medulosamente expuesto por el miembro informante. Sólo me resta expresar la íntima satisfacción que siento por el tratamiento dado a un proyecto del cual soy coautor, que ha sido motivo de este dictamen que hoy consideramos y que espero sea aprobado por este honorable cuerpo, porque tiende a hacer justicia, a superar un anacronismo en nuestra legislación y porque constituye un merecido homenaje a la mujer. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: es indudable la importancia del proyecto de ley que hoy trata este Honorable Senado, referido a la equiparación de la mujer al hombre en el ejercicio de la patria potestad. Ha sido ésta una vieja aspiración de los radicales, también sustentada por los demás partidos políticos en el debate que precedió a los comicios con que se institucionalizó definitivamente la Nación.

No es la primera vez que me toca intervenir en un debate sobre el tema. En este mismo recinto, en el año 1975, discutimos el proyecto de ley sobre el ejercicio indistinto o compartido de la patria potestad, que venía remitido por la Cámara de Diputados con su sanción. Consideramos entonces que en aquel texto, muy breve y expeditivo, simplemente se consagraba el principio del ejercicio compartido de la patria potestad pero adolecía de omisiones y no se contemplaban todos los problemas que involucra la cuestión. Señalamos en aquel momento nuestra discrepancia, pero no fue acogida. Se admitió sólo otra reforma, y por ella el proyecto volvió a la Cámara de Diputados, que finalmente lo aprobó, quedando sancionado. Sin embargo, la ley fue vetada después por el Poder Ejecutivo, a cargo entonces de María Estela Martínez de Perón.

Esto hace que nuevamente debamos afrontar este tema y ahora sí contamos con un dictamen que contempla mejor los problemas fundamentales que están involucrados en este asunto. Está previsto el problema del disenso

de los cónyuges respecto de decisiones que hagan al ejercicio de la patria potestad; expresamente está previsto también el caso de divorcio o separación de hecho y la situación de los hijos extramatrimoniales.

Para mi satisfacción —no es que pretenda la originalidad de las ideas—, en esto se recoge mucho, o casi todo, de lo que expresáramos en aquel debate del año 1975, siguiendo el precedente de la ley francesa de 1970.

Como no quiero fatigar al Honorable Senado con la lectura de aquellos antecedentes, pido muy especialmente a los señores senadores tengan la benevolencia de aceptar que se incorpore a esta altura de mi exposición el breve debate que se realizó en este cuerpo, donde consta lo que se dijo y cómo legisló en ese momento sobre este tema y las discusiones sostenidas.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR DE LA RUA

Cámara de Senadores de la Nación. Sesión
del 17 de septiembre de 1975

REGIMEN DE PATRIA POTESTAD

Sr. Presidente (Fonrouge). — Corresponde considerar el orden del día 240.

Por Secretaría de dará lectura.

Sr. Secretario (Cantoni). — (*Leyendo*):

Honorable Senador:

Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley enviado en revisión por la Honorable Cámara de Diputados sobre modificación al régimen de la patria potestad; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación de la siguiente forma:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Sustitúyese el artículo 264 del Código Civil por el siguiente:

Artículo 264. — La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos desde la concepción de éstos y en tanto sean menores de edad y no se hayan emancipado.

El ejercicio de la patria potestad corresponde indistintamente al padre y a la madre.

En caso de divorcio o separación de hecho de los cónyuges, el ejercicio de la patria potestad corresponderá a aquel que le hubiera sido atribuida la tenencia provisoria o definitiva del menor.

El ejercicio de la patria potestad del hijo extramatrimonial corresponderá a aquel que lo hubiera reconocido voluntariamente.

Art. 2º — Derógase el segundo párrafo del artículo 264 del Código Civil.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 20 de agosto de 1975.

Alejandro Díaz Bialek. — Fernando de la Rúa. — Luis Carnevale. — Carlos A. Franco. — Domingo Andrés Frois Regis. — Luis Culasso Mattei.

Sr. Presidente (Fonrouge). — En consideración en general.

Sr. Díaz Bialek. — Pido la palabra.

La comisión modificó el proyecto que venía en revisión sustituyendo el término "obligaciones" por "deberes". Hizo esto por cuanto el proyecto se vincula con las relaciones patrimoniales y con el deber de cumplir con una prestación, que no se compagina precisamente con las relaciones del derecho natural que implica la patria potestad.

Con respecto al párrafo 2º del artículo 264, debo mencionar que se ha incurrido en un error material. Donde se dice que el ejercicio de la patria potestad corresponderá indistintamente al padre "y" a la madre, deberá decir que corresponderá al padre "o" a la madre.

En este párrafo se ha suprimido del proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados la parte que decía que la patria potestad de los hijos corresponde conjuntamente al padre y a la madre. De este modo, en vez de solucionarse los problemas que se querían evitar crearíamos nuevos problemas, por cuanto numerosas situaciones cotidianas exigen que sea el padre o la madre quien tome las decisiones correspondientes.

La comisión también ha introducido una modificación al proyecto originario venido en revisión, estableciendo que "en caso de divorcio o separación de hecho de los cónyuges, el ejercicio de la patria potestad corresponderá a aquel que le hubiera sido atribuida la tenencia provisoria o definitiva del menor". Esta modificación que ha incorporado la comisión es tanto más aconsejable, por cuanto hemos dado media sanción a la creación de los tribunales de familia, con lo que los jueces tendrán en adelante todos los elementos necesarios para establecer a cuál de los cónyuges debe atribuirse la tenencia del hijo; por consiguiente, está plenamente justificada la modificación realizada.

En cuanto al último párrafo del dictamen de la comisión, introducimos una modificación. Dice que "el ejercicio de la patria potestad del hijo extramatrimonial corresponderá a aquel que lo hubiere reconocido voluntariamente". La modificación que propongo es que el ejercicio de la patria potestad del hijo extramatrimonial corresponderá a aquel que lo hubiera reconocido voluntariamente "o al que hubiese sido declarado su padre o su madre". "Si hubiese sido reconocido o declarado hijo de ambos, la patria potestad será ejercida indistintamente por cualquiera de ellos, siempre que vivan juntos." "Si los padres no conviviesen, el ejercicio corresponderá a aquel que en forma habitual mantenga al hijo bajo su amparo y cuidado."

Con el agregado que hemos sugerido se aclara la situación relativa a los hijos extramatrimoniales, para los cuales subsiste el principio general del artículo 264 que vamos a sancionar, y se especifica en cada supuesto quién debe ejercer la patria potestad.

Además introduciremos un agregado al dictamen de la comisión, el que se refiere al matrimonio de los menores de edad. El mismo consiste en que "si los padres del hijo extramatrimonial fuesen menores no emancipados, su incapacidad será suplida de pleno derecho por el padre o la madre de ellos en ejercicio de la patria potestad o bien por el tutor del progenitor que en forma habitual tenga al hijo bajo su amparo o cuidado, no obstante que el otro progenitor se emancipe o cumpla la mayoría de edad".

Y finalmente agrega: "La tutela ejercida por el Estado en los términos del artículo 8º de la ley 10.903 suple también, de pleno derecho, la intervención de los padres o del tutor judicial".

Por estos fundamentos pido la aprobación del despacho de comisión.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

El proyecto en consideración marca un hito largamente anhelado en la evolución del derecho de familia. Se trata de asignar el ejercicio del complejo de derechos y deberes que integran la patria potestad a ambos cónyuges.

En el fondo, no se hace con esto sino reconocer lo que sucede en la realidad, dado que en la mayor parte de las familias argentinas ambos cónyuges comparten los problemas que trae aparejados una paternidad responsable.

Dentro del régimen vigente, si bien se reconoce la titularidad de la patria potestad a ambos cónyuges, su ejercicio está atribuido sólo en caso de excepción a la madre de los hijos extramatrimoniales.

Este sistema desconoce la igualdad jurídica de los cónyuges, hoy fuera de toda discusión, a la par que ocasiona un cúmulo de inconvenientes prácticos que no se justifican.

El artículo proyectado en el seno de la comisión ha sido objeto por parte del señor miembro informante de una propuesta de modificación, y debo reconocer que también al senador que habla, no obstante haber suscrito el despacho de comisión, le surgieron con posterioridad dudas sobre la redacción del texto.

La idea de la patria potestad compartida está contenida en muchas legislaciones extranjeras, algunas de tanto prestigio como el Código Civil suizo, en su artículo 274; el peruano, de 1936, en sus artículos 391, 392 y 393; el venezolano, de 1942, artículo 261; el chileno, de 1855, en su artículo 219 ya lo contenía; lo mismo que el colombiano en su artículo 250; y en alguna medida el anteproyecto Bibiloni, en su artículo 843, también lo tuvo en cuenta.

Para no fatigar a los señores legisladores voy a pedir la inserción, a esta altura de mi exposición, de estos antecedentes de derecho comparado, con las transcripciones de los respectivos artículos.

—Asentimiento.

Código Civil suizo

Artículo 274. — El padre y la madre ejercen en común la patria potestad durante el matrimonio.

En caso de divergencia el padre decidirá...

Código Civil peruano de 1936

Artículo 391. — La patria potestad se ejerce por el padre y la madre durante el matrimonio. En caso de disenso prevalecerá la opinión del padre.

Artículo 392. — Cuando la patria potestad se ejerza a la vez por el padre y la madre, el representante legal del hijo y el administrador de sus bienes será el padre.

Artículo 393. — En caso de divorcio o de nulidad de matrimonio la patria potestad se ejerce por el cónyuge a quien se confían los hijos.

Código Civil venezolano de 1942

Artículo 261. — Los hijos, cualesquiera sea su estado, edad y condición, deben honrar y respetar a su padre y a su madre, y si son menores están bajo la potestad de éstos.

La patria potestad corresponde al padre, pero a su ejercicio coadyuvará, durante el matrimonio, la madre en lo que respecta al orden doméstico y a la dirección de los hijos. En caso de muerte del padre, de haber éste incurrido en suspensión o privación de la patria potestad, de encontrarse bajo tutela o curatela, de haber sido declarado ausente, de no estar presente, y cuando esté imposibilitado por cualquier otro motivo, la madre ejercerá la patria potestad.

Código Civil chileno de 1855 (Id. Código Civil colombiano, artículo 250)

Artículo 219. — Los hijos legítimos deben respeto y obediencia a su padre y su madre, pero estarán especialmente sometidos a su padre.

Anteproyecto del Código Civil francés

Salvo disposición especial en contrario, el padre y la madre ejercen conjuntamente su autoridad, y la decisión tomada o el acto ejercido por uno de ellos se presume que ha sido con el consentimiento del otro, salvo oposición de este último o de terceros interesados. En caso de disenso entre el padre y la madre, aun antes de haberse tomado una disposición o ejecutado el acto por uno de ellos, cada uno puede solicitar al presidente del tribunal que resuelva el diferendo en refrendo (*en référé*).

Anteproyecto Bibiloni (Editorial Kraft)

Artículo 843. — En cuanto a los hijos legítimos, la madre, junto al padre, durante la unión matrimonial, tiene el derecho y el deber de cuidar de la persona de su hijo. La representación de éste y el gobierno de sus bienes pertenece al padre.

En caso de disenso, prevalece la opinión del padre.

Sr. de la Rúa. — Continúo, señor presidente.

Estimo que la redacción propuesta es adecuada en cuanto se define la patria potestad como un conjunto de derechos y deberes.

En lo demás, no podemos dejar de advertir que de lo que se trata, al mismo tiempo que de afirmar la igualdad jurídica de los cónyuges, es dar solución a una serie de problemas que se presentan en la vida práctica de la relación familiar, al reconocer a la madre un papel activo

en el ejercicio de la patria potestad que hasta ahora no le era reconocido.

El nuevo texto propuesto por el señor senador Díaz Bialek tiende a reemplazar el párrafo segundo del despacho que se refiere a los hijos extramatrimoniales, y establece un criterio basado en una situación de hecho: la convivencia o no de los padres del hijo extramatrimonial.

Cuando se vincula el ejercicio de una facultad como ésta a una situación de hecho, se mantienen los mismos problemas que se trata de superar. Cuando la madre concurre a gestionar el pasaporte para el hijo o cuando deba actuar ante una institución escolar en ejercicio de la patria potestad, tendrá que acompañar, al mismo tiempo, la sumaria información demostrativa de que vive con el padre o de que el hijo está en su poder, de acuerdo con la variante propuesta por el señor senador Díaz Bialek.

Pienso que en esta materia deben darse soluciones que no dejen lugar a dudas, sin perjuicio de dejar abiertas las vías judiciales para que pueda resolverse de otro modo en caso de discrepancia.

Por eso creo que este punto de la cuestión debiera resolverse atribuyendo el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos extramatrimoniales "a quien los reconozca". El reconocimiento puede ser voluntario o forzoso. Bastará que exista certeza jurídica sobre el vínculo paterno-filial para que quede reconocida la patria potestad.

La patria potestad es un conjunto de derechos; pero, sobre todo, un conjunto de deberes, y si los padres conviven no hay ninguna razón para que la patria potestad no sea ejercida en conjunto por ambos.

Sr. Maya. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. de la Rúa. — ¡Cómo no, señor senador!

Sr. Maya. — Si el reconocimiento es voluntario, me parece muy bien que se le atribuya la patria potestad; pero no en el caso forzoso, porque ¿qué patria potestad puede ejercer un padre que niega a su hijo? Ese es lo que planteo.

Sr. de la Rúa. — He meditado largamente esta cuestión y voy a traer a colación el antecedente de la ley francesa de 1970, que es muy ilustrativa, y que he podido encontrar en la Biblioteca del Congreso. En ella se hace una distinción entre el reconocimiento voluntario y el forzoso. Considero que para la solución de este problema puede adoptarse una fórmula como la siguiente: "El ejercicio de la patria potestad sobre los hijos extramatrimoniales corresponde a quien los reconozca. Se aplicará lo previsto para los hijos matrimoniales si fuesen reconocidos por ambos padres; pero si éstos no vivieran juntos el juez, a petición de uno cualquiera de ellos, podrá resolver en trámite sumarisimo otorgar su ejercicio a uno solo, teniendo en cuenta lo más conveniente para el menor".

Esta es la fórmula que propongo, en la cual no distingo el reconocimiento voluntario del forzoso, porque considero que en este caso pueden ejercer ambos la patria potestad, sin perjuicio de la instancia para que el juez otorgue a uno solo de ellos su ejercicio, cuando los padres no vivan juntos.

Creo que la inquietud del señor senador Maya en cierto modo queda también contemplada en la fórmula que propongo.

Debo decir que este asunto de la patria potestad compartida lo hemos estudiado con amplitud y profundidad. Está contenido en la plataforma que nosotros sustentamos como bloque político. Precisamente la plataforma de la Unión Cívica Radical postula el reconocimiento del ejercicio de la patria potestad también para la mujer. No se nos ha escapado que sobre esta materia existen opiniones divergentes. Hay quienes consideran que si bien la titularidad de la patria potestad corresponde a ambos padres, el ejercicio sólo puede corresponder a uno solo de ellos. Estiman que se trataría de una suerte de poder de hecho para la conducción y la orientación de la conducta del menor que, buscando un parangón con la posesión, sólo puede ser ejercido por una persona y no por dos, porque se crearían situaciones conflictivas.

Sin embargo, entendemos que en la realidad, y tal como lo enseñan muchos autores, el ejercicio de la patria potestad es compartido por ambos padres. Incluso hay distintos aspectos de la conducta y de la orientación del menor que son atendidos con preferencia por uno u otro.

Hay una cuestión compleja que se plantea ya en el plano puramente jurídico, sobre todo cuando tiene repercusión patrimonial, y es la que, trascendiendo lo que hace a la orientación de la conducta y cuidado del menor, entra en el campo de la representación jurídica del menor y la administración de sus bienes.

Para ser más concreto voy a leer muy brevemente la síntesis que he hecho de la ley francesa de 1970, que recoge todos los problemas que plantea la cuestión. Esta ley, que constituyó una reforma sustancial en el régimen familiar francés en lo referente al ejercicio de la patria potestad, establece que el ejercicio de ella "corresponde en común al padre y a la madre. En caso de divergencia —porque es necesario plantear el problema de la posible divergencia cuando son dos las personas que tienen un poder idéntico— se estará a la práctica que hubieren seguido antes para situaciones semejantes. En su defecto, o si se discute su existencia o fundamento, resolverá el juez a petición de cualquiera de ellos. Respecto a los terceros de buena fe se considera que cualquiera de los esposos obra con acuerdo del otro en la realización de los actos usuales de ejercicio de la patria potestad respecto de la persona del menor".

Sr. Caro. — ¿Me permite una breve interrupción, señor senador, para formular una pregunta?

Creo que la patria potestad de hecho está compartida por ambos cónyuges cuando es un matrimonio bien avenido. En el caso de desavenencias, sin haber llegado al extremo de la separación de hecho —que es lo que sucede a diario—, ¿qué es lo que ocurre?

Sr. de la Rúa. — ¿Es una pregunta, señor senador?

Sr. Caro. — Sí, señor senador.

Sr. de la Rúa. — El señor senador Caro, como que es un maestro, me formula una amable pregunta que trataré de contestar después de completar mi exposición, mostrando el panorama global del problema.

Por eso he comenzado con la cuestión de los hijos extramatrimoniales para analizar después la de los hijos matrimoniales, que es el punto central del cual derivan las otras soluciones para ir poniendo un poco de orden en el desarrollo de estas ideas.

Desde ya pido excusas por extenderme, pero el asunto tiene gran trascendencia y justifica que seamos conscientes de la decisión que vamos a adoptar, sobre todo, porque estamos modificando un proyecto originario de la Cámara de Diputados.

Como decía, la legislación francesa de 1970 —y la traigo por ser el antecedente más reciente— plantea el problema de los terceros de buena fe y dice que, respecto a ellos “se considera que cualquiera de los esposos obra con acuerdo del otro en la realización de los actos usuales de ejercicio de la patria potestad respecto a la persona del menor. Si uno de los padres muere o es privado de la patria potestad, ésta corresponderá exclusivamente al otro. En caso de divorcio o separación de hecho, y acá podrá ver el senador Caro cómo resuelve el problema la legislación francesa, después veremos cómo lo resolvemos...”

Sr. Caro. — La hipótesis que yo planteaba era distinta.

Sr. de la Rúa. — “...el ejercicio de la patria potestad corresponderá a aquel de los padres a quien el tribunal confíe su tenencia, salvo el derecho de visita o vigilancia del otro. Si la tenencia es confiada a un tercero, los demás atributos de la patria potestad continuarán siendo ejercidos por el padre y la madre si no fuese el caso de proveer a la tutela del menor”.

Agrega que “el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos extramatrimoniales corresponde al padre o madre que lo hubiera reconocido voluntariamente”, lo que concuerda con la tesis del señor senador Maya.

Sr. Maya. — No conocía la ley.

Sr. Díaz Bialek. — Está de acuerdo con la propuesta hecha por la comisión.

Sr. de la Rúa. — Perfecto, yo sostengo un punto de vista que tiene un matiz diferencial, pero creo que es útil el dato que traigo porque ayuda a comprender cómo se ubican las distintas posiciones y cuáles los problemas a considerar y resolver.

Sr. Maya. — Creo que esa disposición de la ley francesa, que era lo que yo sostenía, se inspira en un problema que es elemental: un padre que no reconoce voluntariamente a su hijo no merece absolutamente ningún derecho sobre él, porque en el fondo hay un problema más que jurídico, verdaderamente moral. El que engendra un hijo debe reconocerlo y si no lo hace comete un agravio hacia ese menor. En consecuencia, la ley no le puede otorgar derechos de ninguna especie. Mi opinión es coincidente, veo, con esa ley francesa.

Sr. de la Rúa. — El principio ético que el senador invoca es muy claro y puede compartirse. De lo que se trata es de ver cuál es la solución práctica que se busca en vista de ciertas posibles situaciones que se plantean.

Pero continúo con el texto. Agrega esta ley que “si lo han reconocido ambos, le corresponderá a la madre, pero el tribunal podrá, a demanda de cualquiera de

ellos, o del ministerio público, resolver que será ejercida por el padre o por el padre y madre conjuntamente, siendo aplicable lo previsto para los hijos matrimoniales. Las mismas reglas se aplicarán en caso de reconocimiento forzoso —según el artículo 374, inciso primero de la ley—, sea de ambos o de uno solo de los padres, salvo el caso de resolver el juez que debe proveerse a la tutela del menor, por considerar que ninguno de los padres está en condiciones morales o materiales de ejercer la patria potestad

“El padre y la madre —dice el artículo 382— tienen la administración y el usufructo de los bienes de los hijos menores. La administración legal es ejercida por el padre con el concurso de la madre. El usufructo legal corresponde al que tenga a su cargo la administración.”

El artículo 213 expresa que “los esposos ejercerán juntos la dirección moral y material de la familia, proveyendo a la educación de sus hijos”. Y el 389 prevé que “si la patria potestad es ejercida en común por ambos padres, el padre es el administrador legal. En los demás casos la administración legal corresponderá al que ejerza la patria potestad”.

El artículo 1.384 dispone que “el padre y la madre que ejerzan el derecho de guarda son solidariamente responsables por los daños causados por sus hijos menores que habiten con ellos”. Y el artículo 10, que no modifica el Código Civil, manifiesta que “a partir de la entrada en vigencia de la ley, sus disposiciones regirán inmediatamente los derechos y deberes de los padres respecto de la persona y bienes de sus hijos menores”.

Con respecto a los “hijos extramatrimoniales nacidos antes de la vigencia de esta ley, el ejercicio de la patria potestad corresponderá al padre o madre que la tuviera, según la ley anterior, pero el otro padre podrá pedir judicialmente que le sea transferida por aplicación de las nuevas normas. Los derechos provenientes del usufructo legal abiertos (o creados) bajo la ley anterior no cesan por efecto de la nueva. La responsabilidad del padre y de la madre frente a terceros, por daño, rige para los hechos posteriores”.

Creo que esto nos da un panorama un poco más amplio de las consecuencias que puede tener una decisión sobre este punto y sobre otros que —de aquí viene mi preocupación— no hemos contemplado al modificar el artículo 264 del Código Civil.

Ahora estamos pensando principalmente en el ejercicio de la patria potestad, en lo referente a la atención, cuidado y orientación del menor, pero también están estas otras cuestiones, vinculadas con la administración de los bienes, la representación en juicio, el usufructo legal, la responsabilidad frente a terceros y la situación de los terceros de buena fe, ante quienes debe considerarse, bajo presunción absoluta, que lo hecho por uno de los cónyuges implica el consentimiento del otro.

Me parece que no hemos contemplado todos estos aspectos. De allí que haya pedido al señor senador Díaz Bialek que en su momento difiriéramos el tratamiento del problema, con el fin de agotar su estudio. Como se ve, hay aspectos que todavía falta resolver.

Por último quiero señalar que el punto que se refiere al ejercicio de la patria potestad de los hijos matrimoniales, en cuanto dice que corresponde indistintamente al padre o a la madre (y en este sentido está bien que

corrijamos la conjunción), no prevé el caso del disenso: no sé si el señor senador lo contempla en la modificación que ha introducido.

Sr. Díaz Bialek. — No, no es necesario preverlo, ya que para el caso de disenso está la justicia y existe la acción correspondiente.

Sr. de la Rúa. — Creo que es necesario preverlo para que quede debidamente solucionado en la ley, ya que hay disensos menores y disensos mayores. Existen disensos que provocan cuestionamientos circunstanciales y que pueden ser resueltos adoptando la orientación de la ley francesa, que remite a la práctica seguida con anterioridad, o bien optando por una solución como la del Código suizo, que en caso de disenso da preferencia a la decisión del padre, sin perjuicio de que la madre pueda impugnarla judicialmente, para que el juez, en trámite sumarisimo, diga sobre el punto la palabra final.

Por eso consideraba importante que previéramos el caso de desacuerdo. Me parece que dejamos un campo abierto a diversos problemas si no lo hacemos. Se trata de dejar en claro el ejercicio de la patria potestad por ambos cónyuges, de manera que cuando se presente uno cualquiera de ellos, la autoridad esté habilitada para proceder en consecuencia sin depender de la acreditación de otras situaciones de hecho. Esta observación apunta sobre todo a la forma en que se trata el problema en casos de divorcio o de separación de hecho.

En el nuevo texto que sustenta el señor miembro informante de la comisión se establece, si no he entendido mal, que en caso de divorcio o separación de hecho el ejercicio de la patria potestad corresponderá a aquel que lo hubiera sido atribuida la tenencia provisional o definitiva del menor.

Con una norma de este tipo creamos el siguiente problema. Cada vez que se presente uno cualquiera de los padres, la autoridad deberá exigirle la acreditación de que no está separado de hecho, y, si lo está, la prueba de la tenencia provisional o definitiva del menor. Con esto, cuando queremos dar una solución práctica, creamos en cambio un montón de complejidades.

Por eso propongo suprimir toda referencia a la situación de divorcio o separación de hecho. Para mí, si padre y madre tienen el ejercicio de la patria potestad, la situación no cambia porque haya divorcio o separación de hecho de los cónyuges.

En la actualidad el padre, aun separado y cuando no posea la tenencia de los hijos, conserva el ejercicio de la patria potestad. La privación de la patria potestad es un acto grave que en la ley 10.903 sólo ocurre en los casos expresamente previstos por hechos que afectan realmente toda posible relación paterno-filial útil para el menor.

Por esta disposición se consagra que en caso de divorcio o separación de hecho el padre es privado del ejercicio de la patria potestad. A mi juicio, lo que queremos es extender el ejercicio también a la madre. Y como en los casos de separación y divorcio es generalmente la madre quien tiene la guarda del menor, extendemos el ejercicio de la patria potestad también a ella.

Salimos de un ejercicio unipersonal de la patria potestad para pasar a un ejercicio bipersonal. Creo que no hay razón para apartarnos de esto en caso de divorcio o separación de hecho, introduciendo complicaciones

prácticas cuando lo que queremos es simplificar, para que los problemas de los menores se solucionen con sencillez y rápidamente.

Sr. Caro. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Quizá un poco extemporáneamente, quiero volver sobre mi pregunta. No sé si a través de las expresiones de los señores senadores Díaz Bialek y de la Rúa ha quedado contestada la misma. Entiendo que el sentido del texto proyectado es precisar que en caso de desavenencia, el juez, a pedido de la parte que se siente afectada, decida quién va a ejercer la patria potestad.

La cosa no es baladí, porque si se llegara a los extremos de la separación de hecho o de divorcio hay una serie de situaciones cotidianas que pueden perturbar seriamente la educación del menor. Diferencias sociales entre ambos cónyuges, el deseo de imponer ciertas pautas de conducta, incluso diferencias ideológicas, son situaciones que se presentan y que pueden poner en peligro la salud moral y psíquica del menor.

Si las palabras de los señores senadores de la Rúa y Díaz Bialek dan la interpretación correcta, no voy a proponer ninguna modificación. En caso contrario pediré que se introduzca un agregado al texto que estamos discutiendo.

Sr. de la Rúa. — Continúo, señor presidente.

Se trata, como se ve, de una cuestión compleja, y quiero que quede claro a través del debate que todos nos hemos preocupado por profundizar el análisis para adoptar con plena conciencia la decisión legislativa correspondiente.

He planteado algunas de las dudas que me ha sugerido la meditación posterior de este asunto. Soy consciente de haber suscrito el despacho originario de la comisión, pero luego, al pensar que hacíamos depender el ejercicio de la patria potestad de ciertas situaciones de hecho, me he sentido impulsado a buscar soluciones que no dejaran ningún tipo de dudas, sobre todo para ciertos trámites legales que necesariamente supone dicho ejercicio.

Creo además que dejamos pendiente y habrá que considerarlo después, toda la problemática relativa a cuestiones jurídicas o patrimoniales que dependen de la patria potestad y que la ley francesa de 1970 ha contemplado expresamente.

Pero, cualquiera sea la solución que se dé, me complazco por el hecho de que haya criterio unánime respecto de la necesidad y conveniencia de extender a la madre el ejercicio de la patria potestad, y el reconocimiento de que ambos padres participan del ejercicio de ella. Las otras cuestiones son importantes y deben ser resueltas con el mejor criterio posible para evitar inconvenientes prácticos y cualquier posible error, pero lo fundamental es que con esto avanzamos en el camino del reconocimiento de la igualdad jurídica de los cónyuges y proveemos a los hijos menores del beneficio del ejercicio compartido de la patria potestad por el padre y la madre.

Nuestra solución —y esto hay que aclararlo bien— atribuye el ejercicio indistinto a ambos padres, lo cual marca una diferencia fundamental con ciertas leyes extranjeras que otorgan el ejercicio de la patria potestad “en común” al padre y a la madre, lo que podría suge-

rir que deben concurrir ambos cónyuges a la realización de un acto determinado. Por este proyecto, uno cualquiera de los cónyuges realiza el acto de ejercicio de la patria potestad, y, se lo diga o no expresamente —lo entiendo así—, el acto de ejercicio realizado por uno de ellos supone el consentimiento del otro respecto de terceros.

Si bien he avanzado un poco en consideraciones de orden particular, deseo señalar que en general expresamos nuestro más decidido apoyo a la iniciativa que, por otra parte, responde a proyectos presentados por legisladores de nuestro sector en la Honorable Cámara de Diputados y al cumplimiento de un compromiso público asumido en nuestra plataforma partidaria. Pero por encima de tal compromiso, implica una franca adhesión a un postulado que ya se ha hecho realidad y conciencia entre nosotros: el avance en el camino de la igualdad jurídica de los cónyuges, y como un paso más hacia su plena vigencia, la atribución y el reconocimiento del ejercicio de la patria potestad tanto al padre como a la madre.

Sr. Cerro. — Pido la palabra.

Este proyecto es de trascendental importancia pues se relaciona con la institución de la familia, que es la célula elemental de la sociedad.

Los representantes de nuestro partido en la Honorable Cámara de Diputados propiciaron la creación de una comisión bicameral encargada del estudio de una ley sobre la persona y la familia; una especie de código de la familia, podríamos decir, que abarcara todos estos aspectos. Ello no se opone a las reformas particulares que resulten necesarias.

Debo confesar que no estoy debidamente preparado para el análisis de este tema, en razón de tener que participar en la consideración de una importante cantidad de asuntos que el Honorable Senado debe tratar antes de la finalización del período ordinario de sesiones. Me hubiera gustado entrar al debate con una mayor preparación, sobre todo cuando se presentan en el recinto modificaciones al texto del despacho de la comisión que, por supuesto, desconocemos y simplemente las hemos oído y ni siquiera las tenemos sobre la mesa. Pero tratándose de un despacho que lleva la firma de los señores senadores Díaz Bialek y de la Rúa, que me han precedido en el uso de la palabra, hacemos un acto de fe y manifestamos nuestro acuerdo en general con el proyecto porque creemos que es un sistema perfectamente adecuado a la realidad de nuestro tiempo.

Simplemente nos vamos a aventurar —y humildemente digo que sin haberlo estudiado— a plantear una cuestión que ya un poco ha aclarado, pero presentándola en forma de duda, el señor senador de la Rúa, y que a nosotros se nos plantea de la misma manera.

Cuando el proyecto dice que en caso de divorcio o separación de hecho de los cónyuges el ejercicio de la patria potestad corresponde a aquel a quien le hubiera sido atribuida la tenencia provisoria o definitiva del menor, se nos antoja un ejemplo que es común a quienes andamos en los pasillos de tribunales: un matrimonio que resuelve separarse de común acuerdo, conforme con las disposiciones que el Código Civil contiene, es decir, la presentación conjunta de ambos cónyuges, a la cual el propio Código Civil le da el resultado jurídico de ser

un matrimonio disuelto por culpa de ambos. Siendo así y habiéndose, en el mismo arreglo judicial, atribuido la tenencia de un hijo a uno de ambos cónyuges, nos encontramos con que podría darse el caso de que se haya asignado a la madre por la edad el niño, y el padre resultaría castigado con la pérdida de la patria potestad. Se nos antoja un padre que se convierte un poco en una choquera porque a lo mejor su única función es la de pasar alimentos sin tener ningún derecho de padre. He puesto el ejemplo que se me ha ocurrido y con toda humildad confieso que tal vez estamos equivocados en el planteo, pero dejamos la inquietud a la comisión.

Sr. Díaz Bialek. — Pido la palabra.

En el derecho romano, hasta Justiniano, el hijo era un objeto de propiedad del padre. A partir de Justiniano, el hijo es un sujeto del derecho natural, así como el padre y la madre han recibido un don que deben cumplir como un conjunto de derechos y deberes también de derecho natural.

La institución paterna sigue dominando y continúa vigente hasta que la mujer adquiere el papel protagónico que, desde el punto de vista moral, le corresponde como madre, y se establece la igualdad jurídica de los cónyuges.

En los matrimonios normales es lógico que la patria potestad sea compartida. El problema se plantea cuando los matrimonios tienen diferencias, a solucionar las cuales tienden todos los agregados propuestos. Estas diferencias en los matrimonios con respecto a los hijos ahora se solucionan con un sentido de protección al hijo. Nosotros acabamos de sancionar en la sesión anterior una modificación a la llamada ley 17.711, modificatoria del Código Civil, por la cual se castigaba al cónyuge culpable con la pérdida de los hijos, volviendo al sabio precepto de Vélez Sarsfield —también contenido en la ley 2.363 sobre matrimonio civil— por el cual el juez resolverá cuál es el cónyuge que está en mejores condiciones para la educación del hijo. Es decir, volvemos al sentido protectorista que el derecho contemporáneo tiene ya totalmente apartado de la potestad antigua del derecho romano.

Yo disiento del señor senador de la Rúa, que plantea un problema muy atendible, pero creo que hay una confusión. Cuando el juez en una situación de separación, de hecho o por una sentencia de divorcio, confiere la tenencia definitiva a uno de los cónyuges, lo hace en virtud de razones que ahora serán mucho más valederas, porque acabamos de prestar media sanción al proyecto de creación de tribunales de familia. De esta manera el juez, por medio de los funcionarios que constituyen el fuero de conciliación, va a tener un asesoramiento mucho mayor que ahora, que le permitirá establecer cuál es el cónyuge más apto para la educación de los hijos.

En ese sentido quiero precisar que no hay una pérdida de la patria potestad, sino una suspensión en el ejercicio de la patria potestad, que es distinto.

—Ocupa la Presidencia el señor senador Humberto Antonio Romero, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sr. de la Rúa. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Díaz Bialek. — Sí, señor senador.

Sr. de la Rúa. — La patria potestad nunca se pierde, ni aun en el sistema actual. Solamente se priva del ejercicio de la patria potestad.

Sr. Díaz Bialek. — El artículo 306 del Código Civil señala las razones por las cuales se acaba la patria potestad y el artículo 307 dice que la patria potestad se pierde. Es decir que hay casos en que sí se pierde. En este supuesto, en cambio, no hay pérdida, sino simplemente suspensión del ejercicio por una decisión judicial y en virtud de razones fundadas que va a dictar el juez.

En el caso del artículo 67 bis, que planteaba el señor senador, es decir cuando el juez declaraba la culpa de ambos, ya no se plantea el supuesto que el señor senador viene a cuestionar, porque con la reforma que acabamos de votar el juez mantendrá su plena autoridad para establecer cuál de los cónyuges —ya no es en razón de la culpa— debe tener al hijo.

Para ejercer la acción del artículo 67 bis, de acuerdo con la ley de tribunales de familia, tendrán que pasar primero por el fuero de conciliación y, por consiguiente, el juez estará en condiciones de decir cuál de los dos cónyuges es el más apto.

Lo que sí podría admitir en la sugerencia del señor senador es que, para que sea mucho más explícito, esto podría llevarnos a modificar el artículo 67 bis, con respecto a los hijos; pero aun sin modificaciones, con las que hemos introducido acerca de la tenencia de los hijos, el juez no ha perdido su autoridad para establecer a cargo de quién queda la tenencia de los hijos.

Coincido con el señor senador Maya, en el caso de hijos extramatrimoniales, pues el cónyuge que no reconoció a su hijo, moralmente está inhabilitado para ejercer derecho alguno sobre él. Solamente lo tiene el cónyuge que cumplió con el deber moral de reconocerlo. Y si lo reconocieran los dos, como lo he propuesto, la patria potestad debe ser de un ejercicio indistinto.

Todas las referencias que el señor senador de la Rúa ha hecho acerca de la ley francesa no son muy diferentes a las decisiones concretas propuestas y que resuelven en el orden práctico cientos de pleitos injustificados, que no tienen otra razón de ser que la pasión que separa al padre y a la madre, siempre en perjuicio del hijo.

Estas razones también son válidas en los casos de la representación y administración, porque el padre que no ha reconocido al hijo no tiene derecho a representarlo ni a administrar sus bienes. Bastará con que en la separación de hecho se obtenga la tenencia provisional o en el divorcio la tenencia definitiva, para poseer título suficiente para representarlo y administrarlo.

En el caso de hijos extramatrimoniales, el que no reconoce a su hijo no tiene ningún derecho porque moralmente está inhabilitado.

Sr. Grubisich. — ¿Me permite, señor senador, una interrupción?

No es que no comparta el criterio de que la sociedad en su evolución impone que el derecho paterno, propio de nuestra tradición católica en cuanto al cuidado y la responsabilidad de los hijos, e inclusive de la esposa, no se haya modificado a través del tiempo, porque son las sociedades quienes en su transcurso, al modificar sus costumbres, imponen la legislación que vaya acompañándolas.

Deseo preguntar si son suficientes las modificaciones de este artículo del Código Civil para que la patria potestad se ejerza indistintamente entre ambos cónyuges. Creo que la ley de matrimonio civil también impone una serie de obligaciones al padre, entre ellas la de alimentar a su hijo y a su esposa, o la de fijar el domicilio donde tiene que vivir la familia.

Mi inquietud es saber si esta suspensión o pérdida de la patria potestad impone también una restricción a las facultades otorgadas por las leyes al padre en su carácter de jefe de la familia.

Sr. Díaz Bialek. — He dicho anteriormente que en el caso de los matrimonios normales, en los que rige la ley de matrimonio civil —y si la memoria no me es infiel, creo que es el artículo 51— la mujer debe vivir en el domicilio que fije el marido, es decir, aquí no hay problema en el ejercicio en forma conjunta de la patria potestad, porque los cónyuges están de acuerdo; pero debe hacerse indistintamente cuando uno de ellos está ausente o impedido para ejercer este derecho, porque en este caso el menor no se siente desprotegido. Repito, señor presidente, que en el caso de los matrimonios normales existe un tácito y recíproco acuerdo en cuanto a las obligaciones y derechos. Por ello, en el caso de los matrimonios normales la representación de la patria potestad por el padre o la madre es indistinta y no significa otra cosa que un bien para el menor.

Por eso expresé anteriormente que la legislación contemporánea tiene un sentido proteccionista con referencia al menor. Y cuando criticamos la reforma hecha por la dictadura militar, dijimos expresamente que uno de los graves errores cometidos era esa especie de vindicta pública por la que se castigaba al hijo otorgando su tenencia al cónyuge no culpable, aunque no fuera el más capacitado para educar al menor. Pero en los matrimonios normales no existe ninguna dificultad porque, reitero, existe consentimiento tácito de ambos cónyuges, que siempre están en la actitud de agotar las medidas en favor del hijo, aunque uno se encuentre ausente o impedido.

Sr. Bení. — Solicito, señor presidente, que por Secretaría se dé lectura a las modificaciones propuestas por el señor senador Díaz Bialek.

Sr. Presidente (Romero). — Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Arancibia Laborda). — El señor senador Díaz Bialek en el párrafo segundo del proyecto (artículo 264), propone que en lugar de decir "... al padre y a la madre...", diga "al padre o a la madre...". Y el último párrafo del mismo artículo se lo redacte en la siguiente forma: "El ejercicio de la patria potestad del hijo extramatrimonial corresponderá a aquel que lo hubiere reconocido voluntariamente, o al que hubiese sido declarado su padre o su madre. Si hubiese sido reconocido o declarado hijo de ambos, la patria potestad será ejercida indistintamente por cualquiera de ellos, siempre que vivan juntos. Si los padres no conviviesen, el ejercicio corresponderá a aquel que en forma habitual mantenga al hijo bajo su amparo y cuidado".

Además, el señor senador propone el agregado en este mismo artículo del siguiente párrafo: "Si los pa-

dres del hijo extramatrimonial fuesen menores no emancipados, su incapacidad será suplida, de pleno derecho, por el padre o la madre de ellos en ejercicio de la patria potestad, o bien por el tutor del progenitor que en forma habitual tenga al hijo bajo su amparo o cuidado, no obstante que el otro progenitor se emancipe o cumpla la mayoría de edad. La tutela ejercida por el Estado en los términos del artículo 8º de la ley 10.903 suple, también, de pleno derecho, la intervención de los padres o del tutor judicial".

El artículo 2º dice: "Derógase el segundo párrafo del artículo 308 del Código Civil". Y el artículo 3º es de forma.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales, doctor Alberto M. Fonrouge.

Sr. Presidente (Fonrouge). — Se va a votar en general.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Fonrouge). — Se va a votar en particular. El artículo 1º con la modificación...

Sr. Díaz Bialek. — Corresponde al segundo párrafo del artículo 1º, en donde corregimos la conjunción.

Sr. Presidente (Fonrouge). — Así es, señor senador.

Sr. de la Rúa. — El señor senador ha hecho su propuesta de modificación al despacho. Yo ahora quiero hacer la mía.

El artículo 264 propongo que quede redactado de la siguiente manera: "La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que corresponden a los padres sobre las personas y los bienes de sus hijos desde la concepción de éstos y en tanto sean menores de edad y no se hayan emancipado.

"El ejercicio de la patria potestad sobre los hijos matrimoniales corresponde al padre o a la madre indistintamente. En caso de desacuerdo decidirá el juez en trámite sumarísimo. Cuando la patria potestad se ejerza a la vez por el padre y la madre, la representación legal del hijo en juicio y la administración de sus bienes corresponderá al padre; pero el juez podrá acordarlas a la madre si esto resultara más conveniente para el menor.

"El ejercicio de la patria potestad sobre los hijos extramatrimoniales corresponde a quien los reconozca. Se aplicará lo previsto para los hijos matrimoniales si fuesen reconocidos por ambos padres; pero si éstos no vivieran juntos, el juez, a petición de uno cualquiera de ellos, podrá resolver en trámite sumarísimo otorgar su ejercicio a uno solo, teniendo en cuenta lo más conveniente para el menor."

Sr. Cornejo Linares. — Pido la palabra.

Voy a pedir una aclaración al señor senador de la Rúa, que con tanta amabilidad estoy seguro va a contestarme, con respecto a la modificación de este artículo.

En realidad, quiero confesar que vengo un poco de afuera a este debate, por lo que pido disculpas al Honorable Senado.

Mi pregunta se refiere a lo siguiente. Entiendo que el principio fundamental propuesto de la modificación

que estamos tratando tiende al ejercicio compartido de la patria potestad y planteo el siguiente caso: existe una discrepancia entre los padres acerca de un determinado punto o pauta que se debe seguir para la patria potestad. ¿El juez deberá determinar y resolver acerca de ese disenso diciendo que es uno u otro padre el que tiene razón y uno u otro el que tiene el ejercicio de la patria potestad? No sé si soy claro en la pregunta formulada; pero quiero decir que el juez debe determinar a quién corresponde el ejercicio de la patria potestad porque, siendo ésta compartida, cuál de los dos padres es el que tiene la razón, sin dejar por eso de ser compartida la patria potestad.

Sr. Presidente (Fonrouge). — La pregunta corresponde a la proposición formulada por el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — El juez debe decidir sobre el disenso planteado, es decir, resolver sobre la discrepancia. Frente a dos que no se ponen de acuerdo, un tercero arbitra, y en este caso lo hace el juez en trámite sumarísimo.

Cuando hablo de la representación legal del hijo me refiero a la representación en juicio...

Sr. Cornejo Linares. — Vayamos a un caso concreto. Se produce el caso de la discrepancia entre los padres. El juez dice que la madre es la que tiene la razón. ¿El padre pierde por eso la patria potestad y corresponde exclusivamente a la madre, o será compartida, nada más con el sentido de que en este caso la madre tiene razón, como más adelante la podría tener el padre?

Sr. de la Rúa. — Sigue compartida. No la pierde el otro.

Vamos a un ejemplo también concreto. Un padre quiere que su hijo realice un viaje al exterior y la madre se opone. Al no lograrse acuerdo, el juez resuelve lo que corresponde hacer, y no por esto se pierde el ejercicio de la patria potestad por ninguno de los dos, sino que se resuelve exclusivamente el conflicto que se plantea.

Sr. Cornejo Linares. — Muchas gracias; la misma pregunta la formulo al señor senador Díaz Bialek.

Sr. Díaz Bialek. — En el supuesto en que se ha colocado el señor senador me parece que tiene un inconveniente fundamental, porque tiende a la ruptura del vínculo matrimonial. Estos problemas, de que un padre disienta con la madre si un hijo debe viajar o no, no deben ser llevados fácilmente a los tribunales. En definitiva privará el criterio de uno u otro, pero llevarlo a los estrados judiciales es crear un motivo de disenso, porque es exteriorizar una diferencia que, en vez de fortalecer el vínculo lo está destruyendo. Me parece que esto es muy importante.

Sr. Martiarena. — Pido la palabra.

Quiero referirme al párrafo que alude al caso de divorcio o separación de hecho de los cónyuges para decir que voy a apoyar la proposición de la comisión.

No debo ocultar que hemos conversado este tema con el señor senador de la Rúa y me he quedado también con la inquietud que él planteaba acerca de si la simple asignación de la tenencia debía importar también la

atribución del ejercicio de la patria potestad con exclusión del otro cónyuge.

Sin embargo, me parece que la solución que propone el señor senador no hace nada más que duplicar el pleito en virtud de que él contemplaba que, en tal situación, se resolviera sumariamente, por un trámite judicial distinto al de la tenencia, cuál de los cónyuges es el que va a ejercer la patria potestad.

Con la tesis que propone la comisión, si yo fuera juez, al disponer la tenencia, voy a tener en cuenta que estoy otorgando implícitamente el ejercicio de la patria potestad, y así evitaremos la duplicación del trámite judicial.

Sr. Cornejo Linares. — Con las palabras del señor senador Martiarena, lo que yo solicitaba conteste el presidente de la Comisión de Legislación General, al ver que él las consiente, prácticamente está evacuada mi duda. De tal modo que no voy a insistir en la misma.

Sr. Cerro. — Pido la palabra.

He escuchado al senador Martiarena y, justamente, la misma inquietud que plantea la resuelvo, no como el señor senador de la Rúa, pues no había una pérdida de presión del texto; que siga la patria potestad indistintamente en el padre y la madre; que no se castigue a ambos, a pesar de que uno tenga la tenencia, si el otro no tiene culpa y se trata de un caso de separación en el que la ley atribuya culpa a ambos, o sea que de común acuerdo se han separado de conformidad con el dispositivo vigente en el Código Civil.

Sr. Díaz Biale. — Ya he expresado antes que de acuerdo con la reforma que el Senado ha votado no regirá el principio del artículo 67 bis con respecto a los hijos, porque en lo sucesivo el juez tendrá el deber de dar la tenencia del hijo a quien mejor lo pueda educar física y moralmente.

Sr. Cerro. — Estoy de acuerdo.

Sr. Martiarena. — No hay un problema de culpa, por que al atribuir la tenencia o el ejercicio de la patria potestad se deberá tener en cuenta, oportunamente, el interés del menor, como es la orientación más firme en el derecho de familia.

Sr. Grubisich. — Pido la palabra.

A mí me siguen preocupando algunas dudas sobre todo después del ejemplo que ha dado el señor senador de la Rúa en el caso del viaje al exterior. También se puede plantear en el caso de las vocaciones religiosas. Es simplemente la decisión de uno de los padres la que autoriza al hijo a hacerlo. ¿El otro padre no queda, por lo tanto, en situación de recurrir a la justicia para que se revea?

Sr. Díaz Biale. — Para eso no necesita que otorguemos una acción especial ahora. La tiene siempre. Incluso, voy a agregar una cosa más: la tenencia implica, también, el otorgar la patria potestad, pero si el juez otorga la tenencia a quien no tiene condiciones, no haciendo la tenencia cosa juzgada, puede otorgar luego el ejercicio de la patria potestad al otro cónyuge. Por eso rectifiqué al señor senador de la Rúa, pues no había una pérdida de la patria potestad, ya que no se daba ninguno de los supuestos del artículo 307 del Código Civil. En ese caso hay una suspensión del ejercicio de la patria potestad, única y exclusivamente en bien del menor.

Sr. Grubisich. — Pero eso a mi juicio, no resuelve la contradicción que puede existir entre los padres en cuanto a las decisiones que se tomen, por ejemplo sobre la educación. ¿En el caso de la vocación religiosa, se tiene en cuenta la decisión de uno solo de los padres?

Sr. Díaz Biale. — Lo mismo que antes, podrán recurrir al juez.

Sr. Grubisich. — Antes era el padre solo. Su negativa o su consentimiento decidían la cuestión.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Creo que este punto es muy grave. Actualmente, en la mayoría de los matrimonios desavenidos, separados o divorciados de hecho, la tenencia ha sido acordada a la madre y el ejercicio de la patria potestad sigue correspondiendo al padre. Pero aquí se trataba de extender el ejercicio de la patria potestad a la madre, y con la propuesta del señor senador Díaz Biale, apoyada por el señor senador Martiarena, le será atribuida exclusivamente a ella, quitándole ese ejercicio al padre.

Pero ocurre que la ley que tratamos busca sobre todo la resolución de los casos de situación familiar irregular: de los matrimonios desavenidos, separados o divorciados, sobre todo cuando se presenta el problema de los hijos extramatrimoniales. En los matrimonios debidamente constituidos y sin problemas no se suscitan estas cuestiones, ya que la realidad muestra un ejercicio compartido y armónico de la patria potestad.

De modo que, en lo que es específico de la modificación que estamos tratando, podemos llegar a configurar una gran injusticia. En esa forma se privará del ejercicio de la patria potestad al padre que venía ejerciéndola y a quien, como lo ha señalado el señor senador Grubisich, no hay por qué marginar en lo que respecta a la orientación, vigilancia y educación del menor. El ejercicio de la patria potestad significa el del conjunto de derechos y deberes que la configuran. Es cierto que la titularidad corresponde a ambos cónyuges, pero cuando el ejercicio corresponde a uno solo, ese solo decide. Y lo que aquí queremos es que se comparta el ejercicio.

Sr. Díaz Biale. — Pido la palabra.

Creo que es necesario precisar los conceptos. El Código Civil menciona los casos en que se acaba la patria potestad; por ejemplo, con la muerte de los padres. Y también dice en qué casos se pierde; a saber, cuando se ha cometido por los padres un delito en perjuicio de sus hijos. En estos casos estamos en que hay que decidir si se suspende o no el ejercicio de la patria potestad. Es evidente que si hay una diferencia entre el padre y la madre, ya sea por una situación de hecho o por una decisión legal, por haberse declarado el divorcio, el único perjudicado en el ejercicio conjunto de la patria potestad es el hijo. En este punto lo que el derecho de familia moderno persigue desde un punto de vista moral es el bien del hijo.

En consecuencia, lo que corresponde es que la patria potestad sea ejercida por el titular de la tenencia, y la tenencia no es un hecho arbitrario. Es un hecho moral, porque en el caso de los hijos extramatrimoniales compete al padre que los ha reconocido; o bien es un hecho legal, porque por una resolución judicial fundada se puede adjudicar a uno de los cónyuges y no al otro.

En esas condiciones, la forma de evitar los conflictos que perturban la vida de los hijos, cuando ambos cónyuges tienen iguales derechos y uno dice que sí y otro que no, es ir a una resolución judicial.

Sr. de la Rúa. — Este concepto de buscar lo más conveniente para el menor es por todos compartido; pero entiendo que debe compatibilizarse también con el derecho de los padres a educar a sus hijos. No se trata de exaltar el puro bien objetivo, que incluso puede llegar a privar a los padres de este derecho elemental que crea la relación filial.

Argumentando solamente en lo que se refiere al bien del hijo, se excluye a uno de los padres del ejercicio de la patria potestad. Considero que mal entendemos el concepto que busca el bien del hijo si no defendemos también el concepto básico de la familia, esencial en nuestra sociedad.

Sr. Romero. — Estimo, señor presidente, que el tema está suficientemente debatido, razón por la cual solicito que se proceda a votar.

Sr. Presidente (Fonrouge). — Se va a votar en particular el artículo 1º con las modificaciones propuestas por el señor senador Díaz Biale.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 2º.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Quiero solicitarle al señor miembro informante de la comisión que aclare si el artículo 308 del Código Civil a que se refiere el artículo 2º en consideración ha sido ya derogado por otra ley.

Sr. Díaz Biale. — No está derogado expresamente. Lo estaría implícitamente aplicando el artículo 9º de la ley 11.357, pero sería conveniente la derogación expresa para que no haya lugar a interpretaciones contradictorias. Todos reconocemos que la disposición existente es absurda al determinar que la madre pierde el ejercicio de la patria potestad por contraer nuevas nupcias y la vuelve a adquirir al quedar viuda.

El criterio de realizar la derogación expresa ha sido seguido también por la Honorable Cámara de Diputados con el objeto de evitar confusiones.

Sr. de la Rúa. — De manera que se trata de la ratificación de una derogación implícita.

Sr. Díaz Biale. — Ahora lo hacemos concretamente.

Sr. de la Rúa. — He pedido la aclaración para que no se entienda que damos supervivencia a una norma que fue derogada antes, al hacerlo ahora.

Sr. Presidente (Fonrouge). — Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º.

—Se vota y resulta afirmativa.

—El artículo 3º es de forma.

Sr. Presidente (Fonrouge). — Queda aprobado el proyecto de ley. Volverá a la Honorable Cámara de Diputados con las modificaciones introducidas por el Honorable Senado.

Sr. de la Rúa. — Lo que ahora se resuelve muestra cómo en la labor parlamentaria se enriquecen y mejoran las leyes, y aunque pudiera haber algún punto de disidencia o quizás alguna diferencia que marcar respecto a lo sostenido en 1975, está casi todo resuelto y bien resuelto.

Quiero resaltar un aspecto. En el caso de matrimonios separados de hecho o divorciados, la ley resuelve bien la cuestión: acuerda el ejercicio de la patria potestad al cónyuge que ejerza la tenencia, pero introduce un agregado significativo y trascendente: el otro cónyuge tiene derecho a estar informado y participar de las decisiones que contribuyan al cuidado y educación del hijo. Una solución demasiado tajante, que se limitara a decir que el ejercicio de la patria potestad corresponde a quien ejerce la tenencia y nada más, tendría el efecto de alejar al otro del vínculo filial en cuanto a la formación del hijo, en lo que se manifiesta el ejercicio práctico de la patria potestad. El despacho lo prevé expresamente, y es como si aquel debate de 1975 obtuviera en el texto propuesto una razonable respuesta.

También en el caso de los hijos extramatrimoniales se resuelve el problema dándole el ejercicio de la patria potestad a quien lo ha reconocido. Esta es la solución que daba la ley francesa de 1970 y que sostuvimos en el debate de 1975.

Respecto de la administración de los bienes el despacho también se pronuncia; era necesario contemplarla, lo mismo que al usufructo legal.

De modo que llegamos a un texto completo, no sé si perfecto —la perfección escapa a la voluntad o las posibilidades de los hombres—, pero muy próximo a lo deseable.

El estudio intenso en la comisión, los proyectos tomados en cuenta, los trabajos de todos los partidos políticos expuestos en las campañas electorales y el asesoramiento y asistencia de los distinguidos juristas que han unido su nombre a esta labor y a este despacho, le dan no sólo la fuerza de la legislación y el valor de la norma, sino también el prestigio de la doctrina que lo respalda.

No hacemos sino tomar el camino de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que aprobáramos hace poco tiempo, cuyo artículo 17, punto 4º, expresa que "Los Estados parte deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución se adoptarán disposiciones que aseguren la pro-

eccepción necesaria a los hijos sobre la base única del interés y conveniencia de ellos”.

Este es el punto: el interés de los menores. Al hablar del interés de los menores lo que en rigor decimos es el interés de la familia, como núcleo central de nuestra sociedad, como idea nutricia de la Nación. Es bajo la perspectiva de la familia que podemos comprender los valores trascendentes de la nacionalidad. Es en la familia donde está la fuerza moral de los pueblos, de nuestro pueblo. Es la familia la que nos ha permitido superar las vicisitudes y dificultades más complejas de nuestra historia. Y es de la familia de donde vendrá la fuerza para superar estos difíciles momentos en que es preciso el esfuerzo mancomunado de todos los argentinos.

Por eso, este proyecto, esta ley, esta solución, lejos de debilitar o dividir a la familia, quiere fortalecerla en el ejercicio compartido de una responsabilidad tan esencial como es el cuidado, protección y educación de los hijos. Este es el sentido de la norma que sancionamos.

Algunos la impugnaron diciendo que dividía a la familia, y que ésta para estar unida precisaba de la autoridad excluyente del hombre, del padre, sin comprender que en la realidad de los hechos es el ejercicio compartido de las responsabilidades, de los deberes y los derechos de la patria potestad lo que fortalece a la familia. Estamos obrando esta noche, señor presidente, para fortalecer a la familia argentina.

La solución a los problemas prácticos que se presentan en el ejercicio de la patria potestad, al ser conjunto o indistinto para el padre y la madre, servirá al interés de los hijos, al fortalecimiento de la familia y al reconocimiento de la igualdad de derechos de la mujer.

Hace pocos días, en la Conferencia Internacional sobre Población y en las deliberaciones de la Conferencia Interparlamentaria sobre Población y Desarrollo que la siguieron, realizadas en México, el acento fue puesto en la necesidad de fortalecer a la familia como fundamento de toda política de población y de reconocer a la mujer iguales derechos que al hombre en la educación, cuidado, formación y protección de los hijos.

Se dijo algo que me parece muy importante: no sólo la mujer debe acceder a la igualdad de derechos —igualdad referida al ámbito laboral y a su inserción en la sociedad— sino que también el hombre debe asumir un compromiso de mayor participación en la familia. Justamente, aquella idea de que el hombre debe estar afuera, en su trabajo, y la mujer sola, en la casa, encuentra hoy esta respuesta moderna a través

de los tiempos en la integración de la pareja en el matrimonio, en la familia, en donde unos y otros comparten responsabilidades y derechos.

Felicitó a los autores del proyecto y a los integrantes de la comisión que ha propiciado este magnífico despacho, aun cuando pueda haber cierto perfil menor de divergencia en alguna norma: la técnica jurídica siempre da espacio para ello. También felicitó a los juristas que han asesorado a la comisión, a la Secretaría de Estado del Menor y la Familia, y a su titular Enrique De Vedia, quien trabajó sobre el tema con enjundia, y cuyos antecedentes y referencias han servido también para esta obra, que es de todos, que no tiene color partidario ni pertenece a uno solo de los poderes, sino que es la conjunción de la voluntad popular argentina que esta noche, desde el Senado de la Nación, viene a decir que a través de la igualdad de derechos para el hombre y la mujer en cuanto al ejercicio de la patria potestad, los menores estarán más protegidos y la familia se verá fortalecida, reconociendo a la mujer la igualdad esencial que le corresponde y a que tiene derecho.

Vendrá después la otra igualdad, que hemos preconizado y sostenido, la de los hijos, superando las diferencias entre legítimos y extramatrimoniales, por lo menos en cuanto al derecho a la herencia.

Estamos avanzando, señor presidente. Esta noche no es de discrepancias; se trata de una jornada de saludables coincidencias en esta deliberación de la cual resulta fortalecido el concepto nutricional de la familia, fundamento de la sociedad argentina. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Vidal. — (*Lee*) “Señor presidente, señores senadores: en nuestro concepto, el régimen del Código Civil vigente en materia de patria potestad constituye un reflejo de la desigualdad entre el hombre y la mujer propio del pasado y, como tal, una rémora que pesa en la situación legal y en la condición social de la mujer.

“Si bien la Constitución Nacional consagró el principio de igualdad ante la ley, el Código Civil equiparó a la mujer casada con los incapaces, instituyendo, como lógica consecuencia de esta concepción inferiorizante del sexo femenino, una estructura jerárquica en la familia; así ella, la potestad absoluta sobre los hijos en punto a los deberes y derechos pertenecía exclusivamente al padre y, sólo residualmente, en ausencia de éste, a la madre.

"Debieron transcurrir muchos años para que finalmente se reconocieran a la mujer los derechos civiles primero y luego, durante el gobierno del general Perón, en 1947, los políticos.

"Este largo proceso de cambio en las relaciones entre los sexos, desde la virtual sumisión hasta la progresiva igualdad, también ha determinado la evolución de las relaciones familiares a partir del reconocimiento de los derechos de la mujer casada, de su emancipación, y en los hechos, de la coparticipación de la madre en el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos.

"De esta manera, la persistencia de los preceptos del Libro I del Código de Vélez Sarsfield, que instituyen la potestad sobre los hijos bajo imperio excluyente del padre, resulta un anacronismo. La realidad cotidiana que se presenta a los ojos del legislador indica que en los matrimonios bien avenidos rige de hecho el concurso de ambos cónyuges en el ejercicio del cuidado y formación de los hijos menores, significativo de responsabilidades y decisiones compartidas.

"En cuanto a la otra realidad, la de los padres separados o divorciados, la multiplicidad de inconvenientes y conflictos que suscita la eventual tenencia otorgada a uno y la subsistencia de la patria potestad en el otro, aconseja la unificación de ambas circunstancias en cabeza de uno de los progenitores, sin que ello signifique desposeer al otro de todos sus atributos, ya que aun cuando no ejerza la patria potestad deberá reconocérsele el derecho a observar, advertir, examinar, supervisar, en fin, con el claro sentido de coadyuvar y asistir, y de vigilar, en la medida de su interés, el adecuado crecimiento y formación del hijo.

"Los desarrollistas pensamos que avanzar hacia una sociedad moderna y más acorde con las necesidades humanas no está reñido con la preservación de la pareja como basamento fundamental de la familia, en tanto concebimos la sociedad como una comunidad solidaria en la que deberán crearse las condiciones para superar la grave crisis que la afecta.

"El proyecto que estamos analizando contiene, respecto de los hijos matrimoniales, el ejercicio indistinto de la patria potestad al padre y a la madre, presumiendo la conformidad del uno sobre los actos realizados por el otro, con excepción de los casos enumerados en el artículo 264 quater, que taxativamente exigen la conformidad expresa de ambos padres tornan- do conjunto el ejercicio de la patria potestad. Para el caso de separación, divorcio o nulidad de matrimonio, la norma concentra en la persona a la cual se le ha deferido judicialmente la tenencia, el ejercicio de la patria potestad. En

este último aspecto, que básicamente compar- timos, debería enfatizarse más claramente que tal unificación no excluye el derecho del padre que ha cedido la potestad, de supervisar la crianza de su hijo en todos sus aspectos y de recurrir judicialmente en su resguardo cuando lo crea necesario.

"Finalmente, queremos dejar claramente sen- tado que la sanción de este proyecto no puede implicar la sustanciación de un diferendo entre el padre y la madre, ni postular un triunfo pro- mocional de la mujer. Antes bien, habrá de considerarse que sólo se cambia la funcionali- dad de la patria potestad, poniendo en paridad a los padres no sólo respecto de sus derechos sobre los hijos sino también en cuanto a sus obligaciones. Alejado de toda demagogia, segu- ro de contribuir al fortalecimiento de la familia y a preservar el interés del menor, mas no a privilegiar a un padre sobre otro, adelanto mi voto favorable al proyecto en discusión." (*Aplau- sos en las bancas y en las galerías.*)

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Santa Fe.

Sra. Gurdulich de Correa. — (*Lee*): "Señor presidente, señores senadores: el proyecto de reforma del régimen de la patria potestad que hoy se pone a vuestra consideración expresa una anhelada aspiración de nuestra sociedad. Para los argentinos la familia constituye la célula básica de la comunidad y el elemento in- dispensable para la educación y para la con- vivencia social.

"Los justicialistas comprendimos la necesidad de dar un adecuado apoyo a la familia, y el 11 de marzo de 1949 la Convención Nacional Constituyente, legítimamente elegida por el voto popular, sancionó la Constitución Nacional para la República Argentina, en cuyos contenidos estaban vivientes los postulados del general Perón y de Eva Perón. Uno de sus más impor- tantes capítulos está dedicado a los derechos de la familia y dice textualmente así: «La fa- milia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad, será objeto de preferente atención por el Estado, el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines. 1. — El Estado pro- tege el matrimonio, garantiza la igualdad jurí- dica de los cónyuges y la patria potestad; 2. — El Estado formará la unidad económica fami- liar, de conformidad con lo que una ley especial establezca; 3. — El Estado garantiza el bien de familia conforme a lo que una ley especial de- termine; 4. — La atención y asistencia de la madre y del niño gozarán de la especial y pri- vilegiada consideración del Estado».

"Y fue en base a ese respeto por la familia que se gobernó los años siguientes con la plena felicidad del pueblo argentino. El resultado de aquella forma de proceder está presente hoy en el desarrollo de la mujer argentina, que es capaz de ejercer con singular eficacia tareas de relevancia en las más altas esferas del gobierno, de la ciencia, del arte y de la cultura en general.

"Tenemos conciencia de que transitamos la faz jurídica de una institución natural, llegando al núcleo mismo de la organización familiar.

"De ahí que nuestra labor deba reflejar la adecuación de las necesidades de la misma a los tiempos actuales, siendo la finalidad de la familia el ser forjadora de hombres y mujeres de bien.

"Destaco en mi condición de mujer que nunca hemos luchado sólo por alcanzar los derechos individuales femeninos. Creemos que nuestra presencia es necesaria porque ella garantiza la integridad en las decisiones que hacen al desarrollo familiar en el ámbito de la comunidad nacional, entendiendo que la familia sólo adquiere su total sentido en esa comunidad de lazos espirituales que es la patria.

"Consideramos, entonces, que al aceptar el principio del ejercicio conjunto de la patria potestad, no sólo se logra la equiparación jurídica de la mujer sino que apunta a sancionar la solución técnico-legal más adecuada a una correcta distribución de errores y responsabilidades en la función familiar. Se garantiza así la protección y formación integral de los hijos, como queda plasmado en la nueva redacción del artículo 264 del Código Civil, según la modificación que se introduce por el dictamen en consideración.

"Ante la trascendencia del tema y a la luz de una concepción humanista de la familia, se realizó una meticulosa labor, consultando la opinión de afamados juristas en la materia. Se optó por una reglamentación minuciosa que contemple las diversas cuestiones que se presentan, eligiendo la solución que en cada caso se consideró más oportuna, sin perder de vista la operatividad necesaria que cada una de ellas debe aportar, para no caer en declamaciones principistas que, confrontadas con la realidad, vayan en detrimento de la institución familiar.

"Tal fue la situación que motivó básicamente el veto presidencial, que por decreto 3.049 del 22 de octubre de 1975, devolvió sin promulgar la ley 21.182, pues la falta de reglamentación del disenso generaba una fuente segura de conflictos y un factor de inseguridad jurídica. Se hizo casi irreversible la decisión de uno solo de los padres, sin distinguir la importancia o no de la cuestión, en los casos en que la actuación pa-

terna agotaba el derecho, y viceversa, favoreciendo la marcha y contramarcha con los demás supuestos.

"Todo ello configuró un error de técnica legislativa que hoy debemos superar. Rescatamos también el mencionado veto, dado que en el mismo se mencionaba que lo expuesto no significaba que el Poder Ejecutivo mantendría el sistema del Código Civil, que es una situación poco conocida cuando se comentan las razones que motivaron el veto del Poder Ejecutivo.

"Finalmente, creemos que el principio de la patria potestad compartida o conjunta supera la concepción individualista del Código Civil, cuyo núcleo esencial es la división de poderes entre el hombre, la mujer y los hijos.

"Rescatamos a la familia como comunidad de valores, como generadora de las más altas virtudes y como forjadora de nuevos modelos de ciudadanos.

"Estos temas no sólo se manifiestan en el campo de la patria potestad, sino que abarcan toda la legislación de familia y menores. Por consiguiente, aunque por razones de urgencia hoy tratemos este aspecto del régimen de familia, alentamos la propuesta de formar una comisión especial, tal como el proyecto que he presentado en su oportunidad, que reviste toda la legislación en materia de minoridad y familia, abarcándola en un todo orgánico que supere la dispersión legislativa y la discusión parcial de esta temática, conformando mediante el aporte de las instituciones de la gran familia argentina un cuerpo legal único que la integre doctrinariamente." (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Amoedo. — Señor presidente: con breves palabras voy a fundar una observación al despacho de la comisión y a establecer la razón de mi voto.

Con el señor senador Saadi soy autor de un proyecto análogo al que hoy considera este Honorable Senado. Entiendo que tanto la exposición del señor miembro informante como la del señor senador Menem, autor del proyecto, nos indican que estamos ante un trabajo enjundioso que trata de solucionar el problema de la desigualdad jurídica entre el hombre y la mujer, que tanto ha preocupado y sigue preocupando hoy a la sociedad.

Se habla de la patria potestad compartida y de la patria potestad conjunta. El párrafo 4 del artículo 1º de este proyecto de ley se refiere al artículo 264 quater y establece la necesidad de la autorización conjunta de ambos cónyuges.

La ley establece claramente —como también lo señala nuestro proyecto— que la patria potestad corresponde al cónyuge a quien le hubiere sido otorgada la tenencia definitiva del menor. Considero correcto lo señalado en el despacho de la comisión con respecto a los matrimonios avenidos. Formulo mi observación para los casos —como lo establece el artículo 264— en que exista una sentencia de divorcio, una declaración de nulidad de matrimonio o separación de hecho. De acuerdo con el régimen vigente, la mayoría de los casos judiciales se plantean precisamente en estas condiciones.

Extender las disposiciones de la patria potestad conjunta a los casos que mencioné recientemente, no mejorará la situación jurídica y litigiosa, característica de tantos expedientes judiciales.

Entiendo que existe una contradicción. Quien tiene la tenencia definitiva otorgada judicialmente, está a cargo de la manutención, educación y cuidado del menor. Creo que si bien podría aceptarse la inclusión para los casos de divorcio, anulación de matrimonio o separación de hecho de algunas de las causales que requiere la intervención conjunta de ambos cónyuges, no procedería la incorporación de otras, ya que con ello no se solucionaría el problema que aflige a los casos a que hice referencia.

¿Quién puede conocer mejor los problemas de sus hijos menores: el padre o la madre a quien la justicia, por razones valederas, le ha otorgado el ejercicio de la patria potestad por la tenencia o está a cargo de ellos? No debemos olvidar los innumerables casos judiciales en que, como consecuencia de los juicios de divorcio o de la separación de hecho, prevalece el rencor de uno de los cónyuges sin tener en cuenta que está en juego el destino de sus propios hijos.

Con estas expresiones, señor presidente, dejo señalada mi objeción al artículo a que me refiero. La Honorable Cámara, que tiene en consideración un despacho conjunto de las comisiones intervinientes, debe resolver si la norma observada está en contradicción con el espíritu y el propósito loable que mencionaron los señores senadores preopinantes.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Tucumán.

Sra. Rivas. — Señor presidente: el proyecto de reformas al régimen de la patria potestad que hoy consideramos es el resultado de una antigua y fundada reivindicación sobre el lugar de la mujer en la sociedad argentina, unida a nuestra preocupación por la consolidación de la familia, por la protección y formación integral de los hijos y por el establecimiento de un régimen

jurídico que asegure esos valores y se ajuste a la evolución social y a la exigencia de los tiempos.

Con esta reforma se pretende no sólo equiparar a la mujer en el sentido igualitario exigido por la Convención de Bogotá y otros tratados internacionales a los que adhirió nuestro país. Se pretende afirmar el valor sustancial de una familia integrada y participativa en la que se ejerza una paternidad responsable y compartida en toda su amplitud.

Aspiramos para nuestro país a una democracia plena, de participación y de justicia social; a una comunidad cuyo espíritu participativo no se agote en los actos electorales, sino que se proyecte en forma permanente a todos sus niveles y grupos intermedios y entre ellos el fundamental, que es la familia. Debemos saber ejercitar la participación responsable desde los núcleos básicos de la sociedad hasta sus más altos niveles, y el proyecto que hoy consideramos es una expresión de esa necesidad.

La equiparación de la madre y el padre en el ejercicio de la patria potestad es también una justa reivindicación de la mujer, preanunciada por el Código Civil en su nota al artículo 305, hace más de cien años, pero que no había logrado adquirir su forma jurídica positiva.

Una iniciativa de loable aspiración pero de defectuosa instrumentación —ya lo han mencionado los señores senadores— fue el proyecto sancionado como ley 21.182, que debió ser vetada por el Poder Ejecutivo en 1975, siendo presidente de la República la señora María Estela Martínez de Perón, pues la forma adoptada por dicho texto habría dado lugar a resultados negativos.

Teniendo en cuenta todas las circunstancias expresadas, hemos realizado una detenida y exhaustiva consideración de los proyectos presentados por los señores senadores Menem y Sánchez el uno, y Saadi y Amoedo el otro, y de los aspectos jurídicos y sociales de la cuestión, con el valioso aporte de destacados especialistas del derecho. Desco señalar en particular la concurrencia a esta casa de los doctores Belluscio, Zannoni y Bossert para participar en un extenso análisis del tema.

Sería útil mencionar las razones que llevaron a las comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad a propiciar determinadas soluciones en el despacho que ahora consideramos, sobre puntos en los que existen propuestas y opiniones diversas. Teniendo en cuenta las exposiciones de los señores senadores que me precedieron en el uso de la palabra, en las que trataron en profundidad el proyecto sobre patria potestad, simplemente quisiera reforzar algunos

aspectos que merecieron especial atención por parte de la comisión que integro.

El ejercicio de la patria potestad sobre los hijos matrimoniales se atribuye en forma conjunta al padre y a la madre. Este es el principio que, entendemos, mejor responde al concepto de unidad de la familia y a la función docente de la ley. Se establece en el artículo 264 quater la necesidad del consentimiento expreso de ambos padres para una serie de actos considerados de mayor importancia para el interés personal y patrimonial de los hijos, punto en el que coinciden el proyecto de los señores senadores Menem y Sánchez y los aportes de la doctrina jurídica estudiada.

Para los restantes actos que se efectúan en ejercicio de la patria potestad, el texto establece la presunción de que los actos realizados por uno de los padres cuenta con el consentimiento del otro, salvo que mediaré expresa oposición, lo que se ajusta a las necesidades de la vida cotidiana y al funcionamiento de una familia bien constituida.

En el caso de los padres separados se otorga el ejercicio de la patria potestad al padre o a la madre, según quién esté a cargo de la tenencia de los hijos, sin perjuicio del derecho del otro de tener adecuada comunicación y supervisar la educación de aquéllos. En esta solución coinciden el proyecto presentado por los senadores Menem y Sánchez, el de los senadores Saadi y Amoedo y los aspectos doctrinarios sobre el tema.

Sin embargo, se mantiene en estos supuestos la necesidad del consentimiento conjunto para actos de mayor trascendencia, enumerados en el artículo 264 quater, tal como expresé hace un momento. Consideramos que esta disposición es correcta porque el hecho de la separación matrimonial y de la consecuente atribución de la tenencia a uno de los cónyuges no puede convertirse en una razón para el otro, a quien se privaría de participar en cuestiones decisivas para la vida de sus hijos si no se mantuviera la exigencia del consentimiento conjunto para aquellos actos. Sabemos que existen casos en que uno de los padres, el que no ejerce la tenencia, se desinteresa o abandona a los hijos, pudiendo ser difícil para el otro gestionar y obtener su consentimiento para los referidos actos.

La solución a este problema se encuentra, por una parte, en la autorización judicial supletoria prevista en el último párrafo del artículo 264 quater y, con un carácter más permanente, en la privación de la patria potestad del padre abandonante, establecida en el artículo 307, inciso 2).

De tal modo se contemplan en forma equitativa las diversas situaciones a las que pueda dar lugar la separación conyugal.

El texto propuesto atribuye el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos extramatrimoniales considerando los distintos casos que se pueden presentar y que, hasta ahora, se hallaban deficientemente regulados por nuestra legislación civil. En particular, destaco que se resuelve un supuesto que estaba completamente omitido en el derecho vigente: el de los hijos extramatrimoniales de padres menores de edad no emancipados, o en general incapaces, que se tratan en el artículo 264 bis, dándosele básicamente la solución prevista en el proyecto de los senadores Saadi y Amoedo, adecuándola a las necesidades de una realidad social que frecuentemente hemos conocido en el interior de nuestras provincias.

El procedimiento de resolución judicial de los disensos entre los padres es regulado en el artículo 264 ter, buscándose la forma más rápida y flexible para una vía que, desde luego, normalmente es deseable evitar. Se prevé la posibilidad de que el juez escuche al menor si éste tuviere suficiente juicio y las circunstancias lo aconsejaren, facultad que, de hecho, ya existía. No se ha puesto un límite preciso de edad a los menores que pueden ser citados o escuchados por el juez a fin de que éste pueda guiarse por su criterio en forma amplia y prudente según cada caso.

Se introduce también una norma novedosa sugerida por el doctor Belluscio e inspirada en el derecho español, que permite la atribución judicial del ejercicio de la patria potestad por un plazo determinado a uno de los padres, para poner fin a una reiteración de desacuerdos o conflictos que la madurez de aquéllos no supieran resolver.

Las modificaciones introducidas en los sucesivos artículos del Código Civil y, en particular, al régimen de administración de los bienes de los hijos, corresponde básicamente al proyecto de los senadores Menem y Sánchez, con algunos agregados propuestos por el doctor Belluscio, con la coincidencia de los doctores Zannoni y Bossert, que se ajustan a la necesidad de una adecuación y modernización de las disposiciones sobre la materia.

Se propone también la modificación de los artículos 307, 308, 309 y 310 del Código Civil, relativos a las causas y efectos de la privación de la patria potestad y la suspensión de su ejercicio. El tema no estaba tratado con claridad en la ley vigente, por lo que se establece en el texto propuesto una mejor sistematización. Se aclara expresamente que el abandono es causal de privación de la patria potestad, aun cuando el hijo

quede bajo la guarda o sea recogido por el otro progenitor o un tercero.

Ese punto había sido motivo de discusión en la doctrina y en la jurisprudencia y hubo quienes indirectamente justificaban al padre abandonante cuando la madre u otra persona se ocupaba del hijo, criterio que es inadmisibles si pretendemos afirmar y consolidar las responsabilidades inherentes a la patria potestad. La cuestión queda resuelta con el nuevo texto propuesto para el artículo 307.

Las modificaciones propuestas a otras disposiciones de las leyes 2.393, 10.903, 14.392, 22.278 y Código de Comercio, responden a la necesidad de armonizarlas con la reforma sustancial proyectada y, en ciertos casos, de modernizar su redacción.

A lo largo de este mensaje he expuesto las razones fundamentales que fueron motivo de nuestra reflexión durante el estudio y consideración de los proyectos presentados y que concluyeron en este dictamen.

Para concluir, quiero recordar algunos conceptos fundamentales que fueron expresados por el Concilio Vaticano II, con los que coincide el espíritu que nos ha guiado. La familia es escuela de una humanidad mejor. A fin de que pueda alcanzar la plenitud de su vida y su misión, se requiere la comunicación cordial y el acuerdo de los cónyuges y también la cooperación constante de los padres en la educación de los hijos. De esta manera, las familias donde se encuentran las diversas generaciones y se ayudan en la adquisición de una sabiduría más completa de la vida y en la integración de los derechos personales con las demás exigencias de la vida social, constituyen el fundamento de la sociedad. Queremos para ese fundamento de la sociedad la auténtica solidez del diálogo, el respeto recíproco, la responsabilidad, la integración. Esa ha sido y es la inspiración de nuestra tarea y del despacho que sometemos a la consideración de los señores senadores, anticipando, en nombre del bloque justicialista, el voto favorable a este proyecto de ley. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Simplemente deseo pedir la agregación de una documentación que estuvo en poder de la comisión y que va a servir como elemento de interpretación del texto legal. Me refiero a la versión taquigráfica de la reunión a la que concurrieron los doctores Augusto C. Belluscio, Eduardo A. Zannoni, Gustavo Bossert, Joaquín Da Rocha, Francisco Martín, Mónica G. Walssmann, Haydeé Birgin e Iris Ló-

pez Anaut; a los dictámenes de los profesores Daniel Hugo D'Antonio y María Josefa Méndez Costa y al anteproyecto del doctor Augusto C. Belluscio, que fueron elementos que estuvieron en estudio.

Sr. Presidente. — Se van a votar las inserciones solicitadas por los señores senadores de la Rúa y Brasesco.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Se procederá en consecuencia.¹

Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Gómez Centurión. — Señor presidente, señores senadores: en nombre de los bloques provinciales, deseo manifestar que esta ley viene a cumplir con un profundo deseo de hacer justicia con la mujer argentina.

Después de haber escuchado las magníficas exposiciones de los señores senadores que nos han ilustrado en forma cabal, nos queda la sensación de que se ha realizado un estudio verdaderamente importante por lo cual puntualizo nuestra satisfacción y felicitación tanto a los autores de los proyectos como a los miembros de las comisiones y a los señores profesionales que prestaron su valiosa colaboración. No vamos a agregar más a los fundamentos de tipo jurídico tenidos en cuenta para emitir el dictamen, pero sí deseamos marcar nuestra adhesión a esta ley que apoyamos completamente.

En mi caso particular y en el del senador Gil, que me acompaña como representante de San Juan, no podía ser de otra forma ya que fue nuestra provincia la primera que dio a la mujer la posibilidad del ejercicio cívico, pues sus derechos se establecieron en el año 1927, con lo que pudo votar, elegir, y ser elegida. Posteriormente, en el año 1934 fue una mujer sanjuanina la primera diputada provincial que ocupó una banca en la República Argentina.

De manera que ponemos nuestra cuota de localismo sanjuanino en el homenaje a la mujer y expresamos, en nombre de todos los bloques provinciales, la adhesión a este proyecto que se va a aprobar. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Señor presidente: a esta altura del debate creo que ya ni siquiera debemos decir que ratificamos el concepto fundamental que inspira esta ley de protección, de enalteci-

¹ Ver Apéndice.

nimiento y de protección de la familia argentina, como la célula básica de nuestra sociedad, ya que en esto coincidimos todos, absolutamente todos, a través de las palabras que se han dicho y de las que han quedado sin decir.

Solamente voy a expresar un concepto más, protector de la familia: que a esta sanción de hoy se la considere una oposición fundamental al insidioso veneno que, desde fuera de la Argentina, por los medios modernos de comunicación, se destila en nuestros hogares, mostrando otras formas de familia. En ellas, podemos decir, el padre suele estar animado crematísticamente por una ambición desenfrenada de dinero; la mujer se presenta necesariamente como adúltera reincidente; los hijos, como viciosos o perversos; y las hijas, entregadas a cualquier forma de depravación sexual. Esa es la familia que nos transmiten todos los días los medios de comunicación masivos, en las series que nos venden desde afuera, que pretenden cambiar el sentido y el destino de la familia argentina. Advierto que quizá sea ésta una manifestación más del imperialismo, que también se nota en cuanto al deseo de las potencias de modificar el sistema y el modo de vida argentinos.

No abomino de la vieja familia de carácter patriarcal, fundada en las disposiciones del Código Civil, correspondientes a su época, a su modo de vida y al tono de la civilización de esa hora. Y, según nuestra experiencia provincial, esa familia argentina, de carácter patriarcal, no se ejerció bajo el signo del autoritarismo del padre de familia, sino del amor y de la comprensión de los cónyuges para tener, en cada caso, bajo la mira, el propósito y el deseo de hacer progresar al núcleo familiar y de abrir caminos para la felicidad de los hijos. Sin embargo, se trata de formas pretéritas, superadas por los tiempos. El mundo ha avanzado y han cambiado ciertas maneras y algunas costumbres que se han instalado en la idea y en la forma de la convivencia social.

Por lo tanto, está bien que ahora nosotros le otorguemos *status* legal a los principios del reconocimiento de los derechos de la mujer para el manejo de los intereses de la prole juntamente con el padre de familia.

Quería hacer estas manifestaciones porque votará con un profundo sentimiento de respeto hacia la familia argentina. Creo que todos los esfuerzos que hicimos y que hagamos en el futuro para consolidar a la familia en nuestro medio, serán altamente positivos para nuestra posteridad, para nuestros hijos y nietos.

Pasando a otro aspecto del tema, como el señor miembro informante ha hecho una exposi-

ción minuciosa de todos y cada uno de los artículos de este proyecto, a los efectos de evitar la discusión en la consideración en particular, quisiera hacer referencia a algunos puntos que tal vez servirán para una mejor interpretación de la ley o, simplemente, para que queden registrados como mi opinión acerca de este tema.

En el artículo 264 que se proyecta, se consagra legalmente la tenencia como el fundamento de la patria potestad, para el caso de la familia desavenida. Se trata de un principio que nosotros consideramos en 1975 —y esto lo ha recordado, en cierto sentido, el señor senador de la Rúa. En ese entonces, tuvimos oportunidad de dejar sentado que los jueces, cuando otorgaran la tenencia en cualquier situación de la familia avenida o en alguna situación anómala, debían tener en cuenta que, junto con la tenencia, estaban otorgando el ejercicio de la patria potestad. De tal manera, debían ser más cuidadosos que lo habitual cuando discernían la tenencia de los hijos a alguno de los cónyuges.

En el mismo artículo, el inciso 4º se refiere al caso de los hijos extramatrimoniales reconocidos por uno solo de los padres y se concede la patria potestad a aquel que lo hubiera reconocido. Entiendo que en este inciso se trata del reconocimiento voluntario y no —por una interpretación que no sería totalmente correcta— del que fuera forzado, por una disposición que adoptaran los jueces frente al reclamo de la filiación.

Esto me conduce al inciso 6) del mismo artículo y, al respecto, quiero recordar que en los debates de 1975 —el señor senador de la Rúa seguramente lo recordará porque tuvo participación en ese tema—, el senador Maya planteó la cuestión relacionada con el otorgamiento de la patria potestad a quien fuera declarado judicialmente padre o madre del hijo. El senador Maya hizo una observación que ahora recojo y que es la siguiente: quien ha tenido un hijo y no lo ha reconocido, tiene un derecho muy dudoso a que se le otorgue la patria potestad.

En ese momento, el señor senador de la Rúa nos ilustró acerca de que la ley francesa de 1970 estableció el principio de que el reconocimiento debía ser voluntario para atribuir la patria potestad y en ningún caso por la declaración judicial de paternidad obtenida después de un juicio de filiación. Sin embargo, no me voy a oponer a la sanción de este inciso, para no crear una perturbación en el debate. Pero me permito sugerir que quede aclarado, para la decisión de los jueces, que este otorgamiento de la patria potestad a los padres a quienes se

condena en juicio de filiación, merezca en todos los casos que se recabe la opinión del cónyuge que voluntariamente reconoció al hijo, para establecer las circunstancias y los modos de la tenencia o del ejercicio de la patria potestad.

Quisiera hacer una aclaración sobre el artículo 264 bis a los efectos de su adecuada interpretación. Dice su segundo párrafo: "Si los padres de un hijo extramatrimonial fuesen menores no emancipados, se preferirá a quien ejerza la patria potestad sobre aquel de los progenitores que tenga al hijo bajo su amparo o cuidado, subsistiendo en tal caso esa tutela aun cuando el otro progenitor se emancipe o cumpla la mayoría de edad". Confieso que he tenido que leer muchas veces este texto para extraer su verdadero sentido. Propongo una leve modificación de esta redacción, si así lo acepta la comisión: "Si los padres de un hijo extramatrimonial fuesen menores no emancipados, se preferirá como tutor a quien ejerza la patria potestad del menor padre sobre aquel de los progenitores que tenga al hijo bajo su amparo o cuidado...". Creo que de esta forma se facilitará una interpretación más fluida. Se trata del caso de dos menores que tienen un hijo extramatrimonial y que no están casados. En ese caso la patria potestad se otorga, en virtud de este inciso, al padre que tiene la patria potestad sobre el padre menor del niño, con preferencia a quien tenga simplemente la guarda o la tenencia.

El inciso 6) del artículo 264 quater, que establece los actos que requieren el consentimiento expreso para ambos padres, dice: "Disponer de los bienes inmuebles y derechos o muebles registrables de los hijos cuya administración ejercen, con autorización judicial." Me parece que debe quedar entendido que, tanto en el caso de que haya consentimiento de ambos cónyuges, como cuando hay consentimiento de uno y oposición del otro, la disposición de bienes requiere siempre la autorización judicial.

El texto propuesto para el artículo 27 es el siguiente: "En caso de divorcio, o separación judicial de bienes, o nulidad de matrimonio, incumbe siempre a los padres el deber de dar alimentos a sus hijos y educarlos, no obstante que la guarda sea ejercida por uno de ellos". Entiendo que hay aquí una obligación solidaria, y que esta solidaridad debe quedar claramente establecida para la interpretación de esta cláusula. Es muy frecuente que uno de los padres tenga un gran poderío económico y el otro soporte una penosa situación económica. En tales supuestos no sería justo recurrir, por comodidad o cualquier otra circunstancia, al menos dotado económicamente, y que se prescinda del más dotado; es decir, que éste pueda eludir su obligación amparándose en que no ha sido demandado, ya que debe contribuir al sos-

tenimiento del hijo. La obligación, pues, ha de ser considerada solidaria, de modo que quien represente al menor tendrá derecho a dirigirse contra cualquiera de sus padres. Entiendo que ése es el sentido de la cláusula.

La segunda oración del artículo 278 propuesto reza así: "El poder de corrección debe ejercerse moderadamente, debiendo quedar excluidos los malos tratos, castigos o actos que lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los menores. Los jueces deberán reprimir las correcciones excesivas de los padres". La disposición legal no estipula en qué consistirá esa represión a las correcciones excesivas de los padres. Desde luego, si esos excesos están previstos como delitos en el Código Penal, no habrá dificultad para que se abra la instancia penal. Pero si no está previsto como delito en el Código Penal, queda como algo impreciso para que los jueces repriman esas conductas excesivas.

Pienso que este aspecto se deberá interpretar en función de lo establecido en el inciso 3) del artículo 307 de esta reforma del Código Civil, según el cual la patria potestad se pierde "por poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica o la moralidad del hijo, mediante malos tratamientos, ejemplos perniciosos, conducta notoria o delincuencia". Esa es la interpretación que corresponde dar al artículo 278, y por ello resulta útil que nosotros lo expresemos en este momento para que quede como orientación para los jueces.

En la modificación al artículo 290 se ha deslizado un error de imprenta. Dice: "Es implícita la cláusula de no tener los padres de usufructo...". Como se puede apreciar, debe decir "el usufructo" para evitar que la sanción aparezca con este error.

Por la modificación al artículo 297 del Código Civil parece que se cambia el sistema del Código Civil, ya que establece que los padres no pueden, ni aún con autorización judicial, comprar por sí, ni por interpósita persona bienes de sus hijos, aunque sea en remate público.

El Código Civil prohíbe la compra solamente en remate público. Entiendo que lo que se ha querido decir es que los padres no pueden comprar a sus hijos menores bienes, por sí o por interpósita persona. De lo contrario, estaríamos modificando todo el Código Civil en la parte relativa a que un hijo mayor puede legítimamente vender un bien inmueble a su padre guardando los demás requisitos legales que se establece en la ley.

Estas son todas las observaciones que puedo formular al proyecto en consideración y que he

querido anticipar para no pedir repetitivamente la palabra durante su tratamiento en particular.

Me agradaría que el señor miembro informante expresara su opinión sobre estas observaciones.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — La comisión considera que la interpretación que ha formulado el señor senador Martiarena sobre distintos artículos es la correcta. En consecuencia, se tendrá presente su exposición, que va a servir como una norma de interpretación del articulado.

Sr. Presidente. — Se va a votar en general.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — En consideración en particular.

—Se leen y aprueban los artículos 1º a 6º.

Sr. Menem. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Voy a proponer a la comisión la inclusión de un nuevo artículo, el 7º, que se refiere a una norma general que servirá de interpretación para algunos casos que puedan presentarse, dado que dentro del Código Civil y de otras leyes anteriores existen disposiciones en las que tiene todavía repercusión el sistema actual de la patria potestad, en el sentido de que la ejerce únicamente el padre.

Entonces, como no se puede entrar a corregir y prever todos los casos voy a proponer a la comisión una norma genérica, redactada en los siguientes términos: "Cuando en el Código Civil o en leyes anteriores a la presente se aluda al padre en el ejercicio de la patria potestad, deberá entenderse que tal ejercicio corresponderá en lo sucesivo a los padres conjuntamente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 264 y siguientes del Código Civil".

Esto nos permitirá superar aquellos casos en los que todavía se mantiene la referencia al ejercicio de la patria potestad por parte del padre.

Sr. de la Rúa. — ¿Conjunta o indistintamente?

Sr. Menem. — En forma conjunta.

Sr. de la Rúa. — Es decir que en ausencia de un cónyuge será ejercida por el otro.

Sr. Brasesco. — El agregado propuesto por el señor senador por La Rioja, en alguna medida ha sido evaluado durante el transcurso del debate, realizando las correspondientes consultas.

Se emplea la palabra "conjunta" porque es el término que se utiliza en los artículos 264 y siguientes del proyecto que estamos votando y por las consideraciones técnico-doctrinarias que aquí se han vertido.

La patria potestad es conjunta porque puede ser ejercida por uno u otro de los padres, ya que el ejercicio de uno supone el consentimiento del otro. En caso de existir desavenencias en el matrimonio, el articulado de la ley determina que la autoridad judicial correspondiente será quien dirimirá la situación, teniendo en cuenta el interés familiar.

Considero que el artículo propuesto por el señor senador por La Rioja se corresponde con el texto técnico empleado por la comisión y con el proyecto presentado por los señores juristas. Con las aclaraciones contenidas en el informe de la comisión y con las manifestaciones vertidas por los señores senadores, queda perfectamente claro cuál es el sentido técnico y doctrinario en derecho del término "conjunto".

En consecuencia, la comisión acepta el artículo propuesto por el señor senador Menem.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Quiero señalar con esta aclaración que también se denomina conjunta a la patria potestad indistinta. Comparto lo expuesto por el señor senador Menem y también las observaciones interpretativas formuladas por el señor senador Martiarena.

Sr. Presidente. — Se va a votar el nuevo artículo 7º, de acuerdo con el texto propuesto por el señor senador Menem.

—La votación resulta afirmativa.

—El artículo 8º es de forma.

Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley¹. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

Sr. Brasesco. — Señor presidente: solicito que se deje constancia de que la sanción de esta ley, tanto en general como en particular, ha sido por unanimidad.

Sr. Presidente. — Quedará constancia, señor senador.

6

MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. — Ha quedado reservado el proyecto de resolución por el que se fija como plazo máximo para considerar los despachos de

¹ Ver Apéndice.

las comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad acerca de la equiparación a todos los efectos legales de los derechos correspondientes a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, la sesión a celebrarse el 19 de septiembre en curso.

Sr. Amoedo. — Solicito que se dé lectura por Secretaría a este proyecto de resolución, que está firmado por los presidentes de todos los bloques que componen esta Cámara.

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.

—Se lee nuevamente el proyecto de resolución que figura en el punto XXXIV de los asuntos entrados.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Amoedo. — Como surge de la lectura, el proyecto de resolución alude a una declaración de las Naciones Unidas que en su artículo 10 especifica claramente que todos los niños nacidos de matrimonio y fuera de él tienen derecho a igual protección social. El artículo 16 de la Constitución Nacional, por su parte, establece que todos los habitantes son iguales ante la ley. Desgraciadamente, la legislación posterior no ha dado cumplimiento al precepto constitucional, sino que estableció una diferenciación entre hijos legítimos, adulterinos e incestuosos. Eso fue modificado por la ley 14.367, cuyo artículo 1º declara que no debe haber discriminaciones en razón del nacimiento. Sin embargo el articulado de esta ley establece una diferenciación en cuanto a la legitimación y a los derechos sucesorios de los hijos extramatrimoniales. El principio de una noble y generosa equiparación inspira el proyecto de resolución que con estas palabras dejo fundado y someto a la consideración del Honorable Senado.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción de sobre tablas.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Es simplemente para apoyar el pedido, lamentando que no se me haya invitado a firmar el proyecto leído, porque hace cuatro meses que presenté una iniciativa para establecer definitivamente la igualdad de todos los hombres que nazcan en nuestro país, terminando así para siempre con la calificación de los hijos en nuestra República, justamente por respeto a nuestra concepción constitucional.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — En primer lugar quiero manifestar que la Comisión de Familia y Minoridad está totalmente de acuerdo con este proyecto de resolución. También quiero decir que la comisión está estudiando proyectos relacionados con la equiparación de los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales. Entre esos proyectos está el del señor senador León. Debo manifestar que la comisión va a utilizar la misma metodología: hará el mismo tipo de consultas con juristas, filósofos y hombres de las distintas corrientes religiosas, a fin de tener el despacho correspondiente para el día indicado en el proyecto de resolución. Con ese fin ya se encuentra abocada a la tarea.

Sr. Presidente. — La presidencia entiende que a pesar de haber entrado este asunto con la forma de proyecto de resolución, en realidad se trata de un pedido de preferencia. Por lo tanto, si no se hace uso de la palabra se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobada la moción de preferencia.

7

CREACION DEL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZA

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley del señor senador Britos sobre creación del Registro Nacional de Empresas de Limpieza.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Macris). — (*Lee*):

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha considerado el proyecto de ley del señor senador Britos por el que propicia la creación del Registro Nacional de Empresas de Limpieza; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación sustituyendo el artículo 1º, inciso a) del artículo 3º, los artículos 4º y 11 por los siguientes:

Artículo 1º — Quedan sujetas a las normas de la presente ley todas las personas visibles o jurídicas dedicadas a la prestación del servicio de limpieza a terceros, cualquiera fuere la forma que adopten para su funcionamiento.